

La desigualdad pandémica

Relatos de la sociedad
civil del Sur Global



LA DESIGUALDAD PANDÉMICA

RELATOS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL SUR GLOBAL

La desigualdad pandémica

Relatos de la sociedad civil
del Sur Global

Jessica Corredor Villamil
y Meghan L. Morris
Editoras académicas

Co|lección
Dejusticia

Belique, Ana

La desigualdad pandémica. Relatos de la sociedad civil del Sur Global / Belique, Ana, Mary Louise Dumas, Precious Eriamiatoe, Sana Farrukh, Neha Kurian, Natalia Mendoza Servín, Adebayo Okeowo, Jennifer Peralta, Cristián Sanhueza Cubillos. -- Bogotá: Editorial Dejusticia, 2020.

83 páginas; gráficas; 24 cm. -- (Dejusticia)

ISBN 978-958-5597-54-9

1. Desigualdad 2. Covid-19 3. Sur Global I. Tít. II. Serie.

ISBN 978-958-5597-55-6 versión digital
978-958-5597-54-9 versión impresa

Diagramación

Marta Rojas

Traducción al español y revisión de textos:

Sebastián F. Villamizar Santamaría

Cubierta

Alejandro Ospina

Impresión

Ediciones Antropos Ltda.

Primera edición

Bogotá, Colombia, diciembre 2020

Este texto puede ser descargado gratuitamente
en <http://www.dejusticia.org>



Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Dejusticia, 2020

Calle 35 No. 24-31, Bogotá D.C.

Teléfono: (+57 1) 608 3605

www.dejusticia.org

Contenido

	Introducción	8
Capítulo 1	Dejar las luces prendidas durante la pandemia de la Covid-19 en Nigeria <i>Adebayo Okeowo</i> (Nigeria)	18
Capítulo 2	El privilegio de la cuarentena en Chile <i>Jennifer Peralta</i> (Venezuela)	24
Capítulo 3	¿No hay coronavirus en Nigeria? <i>Precious Eriamiatoe</i> (Nigeria)	30
Capítulo 4	La virtualidad: un arma de doble filo en tiempos de la Covid-19 <i>Natalia Mendoza Servín</i> (México)	38
Capítulo 5	Invisibles ante la pandemia de la Covid-19 en República Dominicana <i>Ana María Belique</i> (República Dominicana)	44
Capítulo 6	Entre la Covid-19 y la horca: Los prisioneros con enfermedades mentales en Pakistán <i>Sana Farrukh</i> (Pakistán)	52

Capítulo 7	La autodeterminación: La resiliencia propia de las comunidades indígenas	60
	<i>Mary Louise Dumas</i> (Filipinas)	
Capítulo 8	Covid Mahamaari: Las experiencias de base en Kerala, India	68
	<i>Neha Miriam Kurian</i> (India)	
Capítulo 9	La desigual pandemia	74
	<i>Cristián Sanhueza Cubillos</i> (Chile)	
	Autores	82

Introducción

Jessica Corredor Villamil y Meghan L. Morris

I. Perspectivas de la desigualdad pandémica

Durante las primeras semanas de la pandemia, en los medios de comunicación y en las redes sociales empezaron a surgir los anuncios. “Esta es una oportunidad para conocerte”, algunos sostuvieron, o, “para entrenar más”, “cocinar mejor”, “aprender algo nuevo”. Nuestros propios colegas abogaron por abrir librerías durante la cuarentena porque era el momento ideal para leer con todo ese tiempo libre. Leímos estos mensajes casi siempre al final del día cuando sentíamos que habíamos fracasado en todo lo que nos importaba a nosotras: el trabajo, la crianza, el activismo, el apoyo a nuestras comunidades y familias. Si aprendimos algo en estos largos meses de cuarentena fue a hacer malabares con el tiempo. Como mujeres, madres de niños pequeños, investigadoras y defensoras de los derechos humanos que trabajan por la justicia social, para nosotras el periodo de confinamiento ha estado marcado por la falta de tiempo —para ser madre, para trabajar por la justicia social, para seguir en las labores de investigación y activismo— y una suerte de cansancio mental que se volvió costumbre.

Pero esta misma forma de cansancio es un privilegio en sí misma. Tenemos nuestros trabajos, un techo sobre nuestras cabezas y comida en la mesa para nosotras y nuestros hijos. Estamos escribiendo este texto desde la comodidad de nuestro hogar, con la certeza de que el salario que recibimos por nuestro trabajo seguirá llegando a fin de mes, con la tranquilidad de poder quedarnos en casa sin exponernos cuando el miedo al contagio sigue vigente para una gran parte de la población, especialmente para quienes deben dejar sus hogares para trabajar y poder alimentar a sus familias.

Esa seguridad que tenemos unos pocos contrasta con la incertidumbre de millones de personas alrededor del mundo. Como por desgracia ya se nos volvió costumbre, los efectos de la pandemia se han hecho sentir de forma más aguda en los sectores más vulnerables de la población: los trabajadores informales que sobrevivían gracias a la economía de subsistencia y se quedaron sin sustento de un día para otro, las mujeres encerradas con sus agresores, los migrantes que deben regresar a pie a sus países, las poblaciones que viven en situación de pobreza y se enfrentan a la precariedad del sistema de salud. Y la lista continúa.

Algunos llamaron al virus como el “gran igualador” por su supuesta capacidad de infectar a cualquier persona en su camino, sin importar su riqueza o posición social. Pero de hecho, el virus expuso las profundas líneas divisorias de nuestras sociedades, pues la pandemia se encontró con las formas existentes y crónicas de desigualdad racial, económica y social. Esto generó una distribución ampliamente desigual del sufrimiento tanto del virus mismo como de sus distintas formas de devastación social y económica que llegaron a su paso.

En Colombia, el hambre y el desespero por no poder salir a “rebuscar” el sustento diario se cristalizó a través del movimiento de los pañuelos rojos, que las personas a quienes les faltaba comida y sustento colgaban en sus puertas y ventanas. La iniciativa, que surgió como un llamado de auxilio y solidaridad, rápidamente se convirtió en un símbolo de protesta por la extrema situación de desigualdad y pobreza en la que viven millones de colombianos. Al final, este movimiento también mostró la amplia insuficiencia no sólo de las ayudas del Estado, sino también los límites de nuestras propias formas de trabajar. Las organizaciones que brindan alivio y hacen trabajo de incidencia en torno a las desigualdades estructurales sólo pudieron llegar a la superficie del problema.

Cuando nos comunicamos con nuestros socios y colegas alrededor del mundo, vimos patrones similares. La pandemia resaltó no solo profundas desigualdades, sino también los límites de nuestras formas de abogacía y solidaridad.

II. Acerca de este libro

En los últimos siete años, Dejusticia ha traído a grupos pequeños de defensores para nuestro Taller Global de Investigación-Acción para Jóvenes Defensores de Derechos Humanos del Sur Global en Colombia. El taller trabaja con estos defensores para profundizar sus habilidades de investigación y narración, construir relaciones y colaboraciones sur-sur e incrementar la visibilidad de su trabajo y escritura. Cada cohorte de participantes del taller escribe capítulos en un volumen editado y publica unas piezas narrativas más cortas en el blog asociado al taller, *Relatos Anfibios*. Con el tiempo, el grupo de los egresados del taller ha crecido y ahora tiene más de cien defensores increíbles, desde Chile hasta Egipto, Nigeria y Filipinas.

Mientras seleccionábamos nuestra octava cohorte para el taller de 2020, nos encontramos en medio de la pandemia. Debido a los riesgos y restricciones a los viajes y reuniones, decidimos posponerlo. Pero parecía que la comunidad del taller podía hacer mucho en la distancia para fortalecer nuestras colaboraciones existentes, hacer visibles las formas en las que los egresados estaban experimentando la pandemia en sus vidas personales y profesionales, y considerar tanto los desafíos como las oportunidades que la pandemia abrió para nuestro trabajo. La mayoría de los egresados trabaja con organizaciones que han hecho incidencia desde hace tiempo en torno a las desigualdades crónicas que la pandemia ha tanto resaltado como profundizado. En lugar de detener este trabajo, la pandemia lo hizo aún más crítico en varias formas. Al mismo tiempo, estas desigualdades y este tipo de trabajo de incidencia en el sur global raras veces son el centro de atención. Parte de la misión del taller, y de este libro, es hacer estas historias más visibles.

El libro pretende contar algunas de las muchas historias de la pandemia desde la perspectiva de los defensores del sur global. Los egresados, de distintas partes del mundo, comenzaron a construir estas historias en relatos cortos como semillas de ideas y reflexiones publicadas como entradas del blog *Relatos Anfibios*. Estos autores luego trabajaron para expandir estas piezas en los capítulos que conforman este volumen.

Este libro, así como todos los libros de los Talleres Globales, fue un ejercicio colectivo desde el principio. Existe sobre todo gracias a la escritura inspiradora y vulnerable de los egresados del

taller que escribieron cada capítulo, durante lo que a menudo fue un período difícil para ellos, sus organizaciones y las comunidades con las que trabajan. Nuestro equipo en Dejusticia, especialmente Manuela Neu y Camila Soto, facilitaron la publicación de los blogs, y Claudia Luque lo hizo para el libro final. Sebastián Villamizar y Morgan Stoffregen, quienes han apoyado los libros del Taller Global desde el principio, prestaron sus excelentes habilidades editoriales y de traducción para las piezas. Y el libro, en el contexto del proyecto más general del Taller Global, ha gozado del continuo apoyo del equipo de Dejusticia, la mentoría y colaboración constante de Nelson Fredy Padilla y el apoyo financiero generoso de la Fundación Ford y la Open Society Foundation.

III. Desigualdades pandémicas

Cuando enviamos la convocatoria inicial de los textos del blog para esta serie, el tema era libre siempre y cuando las piezas estuvieran relacionadas de alguna forma con la pandemia. Y aún así, los borradores hablaban de alguna manera acerca de la desigualdad. Desigualdades que estuvieron latentes desde hace mucho y que la pandemia había profundizado, o expuesto, o reprimido mientras se expandía por los países y comunidades de los autores. Desigualdades que habían inspirado la organización social creativa, las estrategias de resiliencia que estaban listas para cuando llegó la pandemia. Desigualdades que habían roto la confianza en el gobierno, en el sector privado, en las mismas organizaciones de la sociedad civil, lo cual conllevó a que las personas creyeran que los esfuerzos de estos sectores para lidiar con la pandemia, o incluso la existencia misma del virus, fuera un engaño oportunista.

¿Cómo podemos pensar la pandemia a través de la desigualdad y la desigualdad a través de la pandemia? ¿Cómo se ve este análisis cuando uno escribe desde Lahore o Abuja y no desde Londres o San Francisco? ¿Cómo nos ayuda a repensar nuestro papel como defensores y miembros de la sociedad civil y nuestras formas de solidaridad? Esperamos que este libro ayude a dar luces sobre estas preguntas, desde la perspectiva aterrizada de los jóvenes defensores que han dedicado sus energías personales y profesionales para lograr cambios en el mundo.

Varios de los capítulos abren una discusión acerca de las formas en las que la pandemia ha resaltado desigualdades de larga

duración que, con el tiempo, se han convertido en un amplio descontento y desconfianza públicos. Precious Eriamiatoe escribe acerca de la falta de confianza en el gobierno en Nigeria, la cual ha conllevado a que algunas personas piensen que el virus es una estrategia del Estado y a que otras simplemente declaren de cara a las respuestas insuficientes del gobierno para los pobres que “el hambre mata más rápido que el virus”. Jennifer Peralta discute las protestas diarias en Chile a principios de 2020 para una nueva constitución y las formas en las que fueron descarriladas por la pandemia, incluso cuando esta puso en relieve las desigualdades sociales mismas que generaron ese movimiento. Cristián Sanhueza también habla de su trabajo con las comunidades indígenas en Chile, y las formas en las que la pandemia ha recogido la cortina de la estabilidad, lo cual expuso las desigualdades e incertidumbres que a su vez han definido las capacidades para manejar el riesgo de la muerte. Adebayo Okeowo escribe de manera conmovedora acerca de los cortes de electricidad que experimenta en Nigeria con su hijo de cuatro años, que le recuerdan a los cortes de su propia niñez, que son una manifestación de la gobernanza insuficiente que asegura ha conllevado a una desconfianza profunda de las prioridades del gobierno en relación con la pandemia.

Otros capítulos retratan la resiliencia de las comunidades que han experimentado desastres tanto crónicos como agudos en el pasado. Neha Kurian escribe acerca de los planes de manejo de desastres a nivel local que fueron obligatorios en el estado de Kerala en India de cara a una serie de inundaciones y que después estuvieron disponibles para su uso mientras la pandemia se expandía. Louise Dumas escribe desde Filipinas para resaltar la importancia de la toma de decisiones a nivel comunitario para generar resiliencia y de los peligros de las estrategias de incidencia que debilitan esas capacidades, incluso en un esfuerzo para manejar los tipos de emergencia que han surgido en la pandemia.

Los conflictos de los defensores con sus propios roles en la pandemia están centrados en otros capítulos, pues las estrategias de incidencia son limitadas por los requisitos de distanciamiento social y las desigualdades entre quienes pueden trabajar en casa y quienes no tienen otra opción sino tomar el riesgo para proveer a sus familias. Sana Farrukh confronta los desafíos de la representación de una cliente condenada a la pena de muerte con una

enfermedad mental que no puede hablar, mientras se establecían las prohibiciones a las visitas a las prisiones y la audiencia de la cliente ante el Tribunal Supremo de Pakistán fue pospuesta de forma indefinida debido a la pandemia. Ana Belique escribe acerca de las tensiones entre la protección de la democracia en República Dominicana y la protección de su propia salud, y de las formas en las que la pandemia ha subrayado la importancia de las estrategias de solidaridad mientras se siguen negando los derechos básicos a la ciudadanía a las personas nacidas en República Dominicana de padres que migraron de Haití. Al tiempo que estas discusiones observan las formas en las que podemos repensar el papel de la sociedad civil de cara a los desafíos de la pandemia, algunos autores hacen una advertencia tanto de quienes prometen demasiado como de prometer demasiado nosotros mismos. Natalia Mendoza escribe acerca de las promesas sublimes de tecnologías como Zoom para reducir la distancia social y del lado oscuro de dejar nuestra privacidad a un lado por la promesa de la conexión.

IV. El papel de la sociedad civil

La pandemia tiene el potencial de reorientar de manera fundamental el cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos entre nosotros. ¿Cuáles son los nuevos papeles que implican estos cambios para la sociedad civil, para las formas como nos organizamos y como hacemos incidencia? Los colaboradores de este libro, desde distintas perspectivas, nos invitan a considerar lo que estamos aprendiendo de la pandemia acerca del papel de la movilización colectiva y la sociedad civil en tiempos de crisis, y eso nos puede ayudar a reorientar nuestro trabajo hacia el futuro.

Desde que la OMS declaró la Covid-19 como una pandemia, con frecuencia han sido los movimientos de base y las organizaciones sociales quienes han estado en la primera línea de la respuesta a la emergencia sanitaria, para ayudar a las poblaciones vulnerables, hacer campañas de pedagogía frente al coronavirus, fabricar tapabocas en los países donde escasearon y aportar insumos médicos. Al mismo tiempo, muchas de nuestras formas tradicionales de acción colectiva estuvieron limitadas por la amplia desconfianza e inestabilidad, junto con las mismas medidas de distanciamiento social que requerían las respuestas efectivas a la

pandemia. En este contexto, surgieron nuevas formas de movilización desde lo local o de manera más informal para satisfacer necesidades urgentes a través de ejercicios más espontáneos de solidaridad diseñados para este momento. Estas muestras de solidaridad han tomado grandes dimensiones y en algunos casos han ido moldeando nuevas y creativas formas de acción colectiva.

Esta creatividad y la capacidad de resiliencia de las comunidades de base han sido indispensable para mitigar los efectos indirectos de la pandemia. Estas capacidades fueron construidas a través de años de movilización, con frecuencia contra las mismas desigualdades que causaron esas disparidades en la distribución del sufrimiento de la pandemia en primer lugar. Pero esta experiencia también construye fortalezas y estrategias que las comunidades pudieron activar y adaptar como respuesta a la crisis. De cara al fracaso de muchos gobiernos nacionales y locales para brindar una respuesta adecuada a la pandemia, en particular a través de todos los sectores de su población, las comunidades y las organizaciones de base han construido soluciones, usualmente con pocos recursos más allá de sus propias capacidades locales, conocimiento, relaciones y fortalezas colectivas.

Si los gobiernos nacionales y locales hubieran estado lo suficientemente preparados, movilizado recursos e información de manera efectiva, y distribuido estos recursos de manera equitativa, algunos de estos esfuerzos no habrían sido necesarios. La existencia de la movilización local creativa no libra al Estado de la responsabilidad de hacer todo lo que pueda para prepararse ante una crisis y brindar respuestas efectivas y equitativas. Pero sí nos enseña que esas respuestas se beneficiarían si son construidas desde la perspectiva de las personas más vulnerables, de la sociedad civil y de otros grupos locales que se movilizan en torno a un tema. Hacer eso no sólo construiría una respuesta más efectiva sino que también revitalizaría la democracia a nivel local y crearía una cohesión que es tan necesaria en estos momentos.

A esto se suma la importancia de la convergencia del trabajo de organizaciones que trabajan por diferentes causas, como los derechos humanos, la justicia social y la justicia climática, junto a las que aportan asistencia humanitaria y se movilizan a nivel local. Así como la pandemia ha puesto de manifiesto la interconectividad —lo que te afecta a ti allá puede afectarme a mi acá, y nadie

está protegido hasta que protejamos a los más vulnerables— también pone de relieve la importancia de trabajar de manera entrelazada entre organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de base, entre las que trabajan por la apertura del espacio cívico y aquellas que luchan contra la desigualdad.

Así las cosas, aunque la Covid-19 ha revelado las desigualdades estructurales y las falencias de algunos Estados para manejar la crisis, también ha creado una apertura para evaluar y reorientar la acción de la sociedad civil. En un momento en que su labor está siendo fuertemente cuestionada y atacada por parte de gobiernos y diversos sectores de la población, este es el momento en el que la sociedad civil puede reorientar y afirmar su rol en la sociedad.

Estos capítulos son un testamento de las luchas crónicas contra las desigualdades estructurales desde nuestros barrios hasta nuestra comunidad global. Al mismo tiempo, hablan de la importancia crítica de tener una reorientación creativa de nuestras formas de acción colectiva y solidaridad hacia el futuro.

CAPÍTULO 1
Dejar las luces prendidas
durante la pandemia
de la Covid-19 en Nigeria

Adebayo Okeowo
(Nigeria)

Poco después de haber comenzado a escribir esto, empezó a llover y en pocos segundos, hubo un apagón. Eso no es raro, pero nunca me deja de sorprender. En la parte de Nigeria donde vivo, cuando está a punto de llover, empezamos a prepararnos para que se vaya la electricidad y no esperamos a que la restablezcan sino hasta después de que escampe y, como decimos en broma, hasta que los cables se sequen.¹ Así que ahora la silenciosa noche se quebranta por el sonido de las gotas que golpean en el techo y el ruido de los generadores que le dan electricidad a las casas. Así es como ocurre: cuando vuelve la corriente, mi hijo de cuatro años grita con emoción “¡Llegó la luz!”. Verlo saltar de alegría me recuerda mi propia niñez, cuando gritábamos “arriba NEPA” cuando volvía la electricidad. En ese momento, la NEPA era la Autoridad Nacional de Energía Eléctrica (en inglés). Ahora se llama el Holding Empresarial de Electricidad de Nigeria, y el cambio de nombre ha resultado problemático porque muchos se quejan de que la empresa se toma muy en serio su nombre pues “retiene”² la electricidad en lugar de distribuirla a hogares y establecimientos.

Cuando era niño, cada vez que volvíamos a casa mirábamos (sosteniendo la respiración) si nuestros vecinos tenían las luces prendidas, porque eso indicaba si también íbamos a tener

1 Una de las razones para los cortes eléctricos durante las malas condiciones del tiempo en Nigeria es debido a la infraestructura anticuada del país; así que, para prevenir aún más daños a un sistema que ya está sobrecargado, el operador corta el servicio durante las lluvias (“3 Reasons for Power Outages on Rainy Days” 2019).

2 N. del T. En inglés, el verbo *to hold* significa sostener, retener. El autor hace un juego de palabras entre ese significado y la palabra *holding* en sentido empresarial.

electricidad. Nos frustraba de inmediato cuando no veíamos el fulgor naranja en un balcón o en la reja de algún vecino. También era un poco frustrante cuando escuchábamos el sonido de los generadores porque, además de la contaminación auditiva, eso también significaba que sólo tendríamos corriente por un par de horas porque tendríamos que apagarlos antes de dormir. Por eso es muy triste que, décadas después, no mucho ha cambiado y mi hijo todavía tiene que experimentar los efectos de una gobernanza pobre que ha existido desde mi niñez.

El problema de la electricidad es una fracción de los muchos otros problemas que han azotado a Nigeria durante tantos años. Los nigerianos se han obligado a volverse su propio gobierno, al cavar pozos y perforaciones para obtener agua, comprar generadores para garantizar un flujo constante de energía³, contratar mano de obra para arreglar las vías, organizar vigilancia para controlar el crimen y así sucesivamente. Contra este trasfondo, añadir una pandemia a esas cargas era lo último que necesitábamos. Pero aún así pasó y, en febrero, el Ministerio Federal de Salud confirmó el primer caso de Covid-19: un hombre italiano que retornó al país desde Milán (“Coronavirus: Nigeria Confirms First Case in Sub-Saharan Africa” 2020). Así que ahí estábamos, confrontados por una crisis sanitaria que había perjudicado a economías gigantes, sobrepasado los mejores sistemas de atención sanitaria del mundo y prácticamente paralizado a todas las personas. Pero había una esperanza de que así como Nigeria contuvo el virus del ébola en 2014, también podríamos contener el coronavirus en muy poco tiempo (Campbell 2020; Ikhuoria 2014). Sin embargo, la Covid-19 ha resultado ser muy diferente del ébola y ha exacerbado los problemas existentes.

Pero uno de los problemas con los que nadie debería estar lidiando junto a una crisis sanitaria de esta magnitud es un sistema de electricidad intermitente. La situación de la energía en Nigeria es tan severa que, sólo en 2019, la red nacional colapsó más de diez veces y hubo apagones a lo largo del país (Wahab 2019). Esto es tan inaudito que parece increíble pero, por desgracia, es

3 Según un informe del Access to Energy Institute (2019), Nigeria tiene más de veintidós millones de generadores pequeños a gasolina, cuya capacidad es ocho veces más grande que la de la red eléctrica nacional.

cierto. También es cierto que antes de la Covid-19, se sabía que los hospitales hacían cirugías a la luz de antorchas y lámparas; y es cierto que algunos de los grandes hospitales públicos habían tenido períodos extensos de apagones que han dañado su capacidad de tener una buena calidad en la atención sanitaria (Adeshokan 2020; Onyenucheya 2019). La energía epiléptica es, por tanto, una preocupación mientras vivimos en la pandemia. Los hospitales y centros de salud, ahora más que nunca, requieren de un servicio constante para atender a los pacientes.

Los hogares también necesitan un servicio constante de energía, especialmente ahora con las restricciones impuestas por el gobierno para controlar la propagación del virus. Pero en vez de mejorar la oferta eléctrica, el gobierno nigeriano, después de levantar el confinamiento, introdujo un aumento del 50% en las tarifas de energía, a pesar de que los ciudadanos siguen tratando de lidiar con los constreñimientos económicos inducidos por la pandemia (“Halt the Electricity Tariff Increase” 2020). Y si acaso las masas empobrecidas deciden recurrir a sus generadores de respaldo, que ya están sobrecargados, para obtener energía, el gobierno se aseguró de que el costo del combustible también se aumentara un 15% (Davies 2020). La combinación de estos dos movimientos del gobierno durante un momento extremadamente difícil habla por sí sola de cuán poco este se preocupa por las dificultades de sus ciudadanos. Por ejemplo, este es el mismo gobierno que destinó nueve mil millones de naira para renovar la Asamblea Nacional mientras el país todavía se recogía del impacto de la Covid-19 (Erezi 2020). Si esto no cabe en la descripción de “prioridades erradas”, nada más lo hará. Ese dinero pudo haber sido mejor gastado si lo hubieran destinado a mejorar el sistema de salud, a ayudar a los pequeños negocios a sobrevivir durante la pandemia o incluso a brindar una oferta eléctrica estable para que los nigerianos no tengan que gastar la cuantiosa suma de doce mil millones de dólares al año para generar su propia corriente (Osae-Brown and Olurounbi 2019).

Los efectos de la falta de una corriente estable son amplios, y se extienden más allá de la salud hacia el acceso a la educación. Por ejemplo, aunque algunas familias más afluentes han podido conectar a sus hijos a las clases virtuales durante los confinamientos de la Covid-19, los niños en áreas rurales no tienen los medios

para darse ese lujo, especialmente porque sólo el 36% de las personas en estas áreas están conectadas a una red eléctrica.⁴

Si hay algo que ha demostrado la pandemia de la Covid-19 es que los líderes no se vuelven compasivos o capaces de repente durante una crisis. La realidad es que aunque algunos países están aprendiendo de la pandemia y comenzando a mejorar, otros apenas sobreviven. Es preocupante que el gobierno nigeriano no haya convertido este momento de emergencia global en una oportunidad para arreglar lo disfuncionales que son muchos aspectos del sistema nigeriano. Todavía nos faltan meses y quizá años para luchar contra el coronavirus, y no tenemos por qué mantener el statu quo.

Ahora, ya escampó y volvió la electricidad. El ruido de los generadores le ha dado paso al silencio de la noche. Parece el momento perfecto para renovar la esperanza.

Referencias

“3 Reasons for Power Outages on Rainy Days”. (2019). Nigeria Electricity Hub. 25 de julio. Disponible en: <https://www.nigeriaelectricityhub.com/2019/07/25/3-reasons-for-power-outages-on-rainy-days>.

Access to Energy Institute. (2019). *Putting an End to Nigeria's Generator Crisis: The Path Forward*. https://a2ei.org/resources/uploads/2019/06/A2EI_Dalberg_Putting_an_End_to_Nigeria%E2%80%99s_Generator-Crisis_The_Path_Forward.pdf.

Adeshokan, O. (2020). “Surgery by Candlelight: Hospitals in Nigeria Suffer Losing Power—and Staff”. *Guardian*, 7 de enero. Disponible en: <https://www.theguardian.com/global-development/2020/jan/07/surgery-by-torchlight-hospitals-in-nigeria-suffer-losing-power-and-staff>.

Campbell, J. (2020). “Nigeria Responds to First Coronavirus Case, Learning from 2014 Ebola Response”. Council on Foreign Relations blog post, 4 de marzo. Disponible en: <https://www.cfr.org/blog/nigeria-responds-first-coronavirus-case-learning-2014-ebola-response>.

4 Según Power Africa, un proyecto liderado por USAID, sólo el 45% de los nigerianos (36% de los residentes rurales y 55% de los residentes urbanos) están conectados a la red eléctrica formal (USAID 2020).

“Coronavirus: Nigeria Confirms First Case in Sub-Saharan Africa”. (2020). *BBC*, 28 de febrero. Disponible en: <https://www.bbc.com/news/world-africa-51671834>.

Davies, P. (2020). “Nigeria Hikes Petrol Prices as COVID-19 Bites Budget”. *Africa News*, 14 de septiembre. Disponible en: <https://www.africanews.com/2020/09/14/nigeria-hikes-petrol-prices-as-covid-19-bites-budget>.

Erezi, D. (2020). “Budget Office Denies Allocating N27 Billion for National Assembly Renovation”. *Guardian*, 4 de junio. Disponible en: <https://guardian.ng/news/budget-office-denies-allocating-n27-billion-for-national-assembly-renovation>.

“Halt the Electricity Tariff Increase”. (2020). *Guardian*, 6 de septiembre. Disponible en: <https://guardian.ng/opinion/halt-the-electricity-tariff-increase>.

Ikhuoria, E. (2014). “Case Study: How Nigeria Contained the Ebola Outbreak”. *ONE*, 29 de octubre. Disponible en: <https://www.one.org/us/blog/case-study-how-nigeria-contained-the-ebola-outbreak/>.

Onyenucheya, A. (2019). “Blackout in LUTH as Treatment, Other Medical Services Are Slowed Down”. *Guardian*, 15 de junio. Disponible en: <https://guardian.ng/news/blackout-in-luth-as-treatment-other-medical-services-are-slowed-down>.

Osae-Brown, A. y R. Olurounbi. (2019). “Nigeria Runs on Generators and Nine Hours of Power a Day”. *Bloomberg*, 23 de septiembre. Disponible en: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-23/nigeria-runs-on-generators-and-nine-hours-of-power-a-day>.

USAID. (2020). “Nigeria: Power Africa Fact Sheet”. 16 de abril. Disponible en: <https://www.usaid.gov/powerafrica/nigeria>.

Wahab, B. (2019). “Nigerians in Darkness as National Grid Collapses for 11th Time in 2019”. *Pulse*, 9 de noviembre. Disponible en: <https://www.pulse.ng/news/local/blackout-as-national-grid-collapses-for-11th-time-in-2019/pggqqs>.

CAPÍTULO 2

El privilegio de la cuarentena en Chile

Jennifer Peralta
(Venezuela)

Como venezolana, una de las razones que me hicieron tomar la decisión de emigrar a Chile en 2017 fue su estabilidad económica y con ella, las posibilidades que podrían abrirse para mí. Sin embargo, transcurridos unos meses, comencé a comprender que aquel desarrollo económico que en un primer momento me atrajo, no comulgaba con las garantías en materia de derechos humanos necesarias para que una persona pueda vivir con dignidad. Pasaron poco más de dos años para que aquello que yo venía percibiendo como migrante y como activista de derechos humanos se hiciera aún más visible, a través de un fenómeno social que marcó un antes y un después de la historia democrática de Chile.

En octubre de 2019, el aumento de treinta pesos en la tarifa del Metro fue el inicio de un conjunto de protestas. Al principio sólo fueron estudiantes que utilizaron una estrategia masiva de evasión del pago del metro en Santiago, pero poco a poco el malestar se empezó a extender a otros sectores, regiones, y grupos etarios. El día 18 de ese mes la situación se descontroló con más protestas y disturbios, porque los ciudadanos afirmaron en pancartas y grafitis que “No son 30 pesos sino 30 años” en los que han estado sometidos a un conjunto de injusticias que, amparadas por la Constitución, han impedido la garantía de derechos básicos para todas y todos. Educación, salud, seguridad social y vivienda digna fueron los temas recurrentes que podían verse en pancartas, paredes, y escucharse en las consignas durante las marchas.

Con las movilizaciones diarias, la ciudadanía había logrado que se fijara un plebiscito para el 26 de abril de 2020, con el objetivo de saber si los ciudadanos estarían de acuerdo con iniciar un proceso constituyente. La nueva Carta Magna reconocería derechos como la salud, la educación, la seguridad social. Pero este

estallido social fue puesto en pausa por “palabras mayores”: la pandemia de la Covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS 2020) declaró una emergencia de salud pública mundial producto de la Covid-19.

Con esta pandemia comenzó a agudizarse y ponerse aún más en evidencia la crisis social que había estallado en octubre de 2019. La situación comenzó a volverse compleja. Dado que las aglomeraciones de personas aumentan el riesgo de contagio, no se pudieron hacer más movilizaciones. Además, a finales de marzo se anunció la prórroga del Plebiscito Nacional hasta el 25 de octubre (Serval 2020).

¿Qué ha pasado con el malestar social? Si bien es cierto que la crisis sanitaria ha puesto en pausa las masivas protestas sociales, también es verdad que ha puesto aún más en evidencia las desigualdades e injusticias sociales que generaron el estallido. Un ejemplo claro es que la cuarentena, usada como estrategia fundamental a nivel mundial para detener la propagación del virus, no es algo que todos los ciudadanos puedan cumplir. El teletrabajo es un privilegio para algunos, mientras que para otros es impensable porque implica quedarse sin sustento. Una encuesta realizada en marzo de este año por la Universidad de Chile (2020) señala que más del 70% de empleados pertenecientes a hogares con ingresos menores a 600 000 pesos chilenos (aprox. 700 dólares mensuales) seguía desplazándose a sus trabajos, mientras que más del 73% de los empleados en hogares con ingresos de 1 500 000 pesos chilenos (aprox. 1800 dólares), hace teletrabajo. Para dimensionarlo: el suelo mínimo actual está en aprox. 320 000 pesos (380 dólares), lo que puede corresponder solamente al gasto de un arriendo. A todo lo anterior hay que sumarle que, para 2018, según información del Instituto Nacional de Estadística (Bío Bío Chile 2019), el 50% del total de trabajadores chilenos percibió ingresos menores o iguales a 400 000 pesos mensuales. Y, además, la crisis sanitaria ha agudizado el desempleo, que en el primer trimestre del año fue de 8,2%, y que representó, según información del INE, un aumento de 1 punto porcentual (INE 2020) respecto al mismo periodo en 2019.

Enfermarse en un país como Chile genera angustia porque la calidad del servicio y del acceso a medicinas está supeditada al nivel socioeconómico. Independientemente de las medidas tomadas

por el Gobierno para afrontar la Covid-19, la Constitución chilena sigue sin ser categórica en señalar que la salud es un derecho, sino que hace énfasis en que cada quien tiene el derecho de elegir su sistema de salud, público o privado. Pero quienes vivimos en Chile sabemos que el servicio de calidad es el sistema privado que, a su vez, también está segmentado según los ingresos.

Pasa algo parecido con el derecho a la seguridad social. La Carta Magna que no es clara en darle estatus de derecho y deja en manos de privados el manejo de los ahorros que se convertirán en las pensiones al momento de la jubilación.

Es un hecho público y notorio que el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) obtuvo una ganancia de más de 400 millones de pesos en los primeros nueve meses de 2019 (El Mercurio 2020), mientras que, a junio del mismo año, el promedio de pensiones fue de 290 070 pesos para hombres y de 176 856 pesos para mujeres (Superintendencia de Pensiones 2019). Ninguna alcanzó el valor del sueldo mínimo, que ese momento era de 301.000 pesos. Aunado a esto, el último Informe de Deuda Morosa de la Universidad San Sebastián (El Mostrador 2020) dio a conocer que entre 2018 y 2019 las personas mayores de 60 años aumentaron su morosidad en un 11,4%.

Es importante señalar que, debido a la crisis de la Covid-19, los fondos de las AFP han venido sufriendo una importante caída (El Mercurio 2020) que ha afectado los ahorros de los ciudadanos que no tienen garantías al respecto.

Distintas organizaciones sociales que visibilizan las vulnerabilidades de las personas mayores han venido haciendo énfasis en esta delicada situación. Además, este es el grupo que tiene un mayor riesgo de contagio y de muerte por el virus.

Otros elementos también llevan a confirmar que la cuarentena es un lujo. Hay 77 000 hogares en situación de hacinamiento (Ciper 2020), lo cual deriva en un grave riesgo de contagio. Además, hubo un incremento de la violencia intrafamiliar. El Ministerio de la Mujer informó un aumento del 70% en las llamadas a la línea que habilitó para recibir denuncias de violencia contra la mujer (The Clinic 2020). Se espera que, si se escribe una nueva Constitución, se incluya en ella el derecho a una vida libre de violencia para la mujer, a su salud sexual y reproductiva, y a la paridad en los distintos ámbitos de la vida social.

Ahora bien, es cierto que garantizar los derechos humanos no es sólo cosa de tenerlos reconocidos en la Constitución y las leyes. Un ejemplo es Venezuela, cuya Carta Magna refleja avances importantes en materia de derechos, pero muchos activistas definen al Gobierno actual como una dictadura criminal. Sin embargo, es necesario que las estructuras del Estado puedan establecer un piso formal y robusto (mediante la Constitución y las leyes) para una vida digna, para que los ciudadanos tengan herramientas de exigencia, y para que los Gobiernos tengan una guía de cómo garantizar y dar pasos importantes en la materia. Una democracia que se precie de serlo tiene que atender con urgencia estos asuntos.

Las protestas ya comenzaron a reactivarse a pequeña escala (Paúl 2020). No sé cuánto tiempo la pandemia podrá contener el malestar social que sigue aumentando. Pero deseo para Chile lo mismo que para mi país, Venezuela: dignidad. Una democracia con igualdad social, con garantía de derechos, donde se respete y se incluya la pluralidad del pensamiento.

Deseo para Chile una nueva Constitución.

Referencias

Bío Bío Chile. (2019). "Revelan el sueldo promedio de los chilenos en 2018 y el porcentaje que gana más de \$3 millones". 13 de agosto. Disponible en: <https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2019/08/13/revelan-el-sueldo-promedio-de-los-chilenos-en-2018-y-el-porcentaje-que-gana-mas-de-3-millones.shtml>.

Ciper. (2020). "Viviendas hacinadas y campamentos: dos rostros de la desigualdad frente al Covid-19." 26 de marzo. Disponible en: <https://ciperchile.cl/2020/03/26/viviendas-hacinadas-y-campamentos-dos-rostros-de-la-desigualdad-frente-al-covid-19/>.

El Mercurio. (2020). "Título". Día del mes. Disponible en: <https://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Analisis/2020/03/03/Retorno-de-los-multifondos-de-AFP-en-febrero.aspx>.

El Mostrador. (2020). "Chilenos endeudados: informe revela que el número de morosos aumentó en 100 mil personas el último trimestre de 2019". 30 de enero. Disponible en: <https://www.elmostrador.cl/dia/2020/01/30/informe-de-deuda-morosa-se-registraron-mas-de-100-mil-personas-morosas-en-el-ultimo-trimestre-de-2019/>.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2020). "INE publica resultados de la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre enero-marzo 2020". 30 de abril. Disponible en: <https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/04/30/ine-publica-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-empleo-del-trimestre-enero-marzo-2020>.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). "Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 29 de abril de 2020". 29 de abril. Disponible en: <https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--29-april-2020>.

Paúl, F. (2020). "‘El sistema chileno es más cruel que el coronavirus’: el rebrote de las manifestaciones en Chile en medio de la pandemia". *BBC News Mundo*, 30 de abril. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52474988>.

Servicio Electoral de Chile (Servel). (2020). "Acuerdo político posterga la realización del Plebiscito Nacional". 23 de marzo. Disponible en: <https://www.servel.cl/acuerdo-politico-posterga-la-realizacion-del-plebiscito-nacional/>.

The Clinic. (2020). "Ministerio de la Mujer advierte aumento de un 70% de llamadas por violencia intrafamiliar durante cuarentena". 6 de abril. Disponible en: <https://www.theclinic.cl/2020/04/06/ministerio-de-la-mujer-advierte-aumento-de-un-70-de-llamadas-por-violencia-intrafamiliar-durante-cuarentena/>.

Universidad de Chile. (2020). "Sólo 1 de cada 4 trabajadores de menores ingresos realizó teletrabajo iniciada la crisis sanitaria por COVID-19". 7 de abril. Disponible en: <https://www.uchile.cl/noticias/162383/solo-1-de-cada-4-trabajadores-de-menores-ingresos-realizo-teletrabajo>.

CAPÍTULO 3

¿No hay coronavirus en Nigeria?

Precious Eriamiatoe
(Nigeria)

“Señora, si no trabajo, mi familia y yo vamos a morir de hambre antes de que nos contagiemos del virus”. Estas fueron las palabras del taxista que conocí en un viaje al supermercado durante el confinamiento en Abuja, Nigeria.¹ Mientras conversábamos acerca del efecto del confinamiento, intenté explicar la importancia de la orden de mantenerse en casa para prevenir el contagio del virus. Fue en este punto que expresó su voluntad de tomar el riesgo para llevar comida a su mesa.

Esta conversación me hizo reflexionar lo que significa el brote de la Covid-19 para las personas nigerianas promedio, así como para las pobres y las más vulnerables, el cual van a enfrentar contra todos los pronósticos para poder sobrevivir. De forma más importante, la conversación reveló cómo la corrupción sistemática no sólo ha aumentado la desigualdad de ingreso y el hambre sino también ha resultado en una falta de confianza en el Gobierno. Aunque los nigerianos han lidiado con la corrupción, la pobreza y la desigualdad de ingreso durante mucho tiempo, casi hasta el punto de la resignación, una pandemia global exacerbada y pone en relieve estos problemas, lo cual provoca una reflexión crítica sobre por qué deben abordarse de manera efectiva y a tiempo. En este texto, reflexiono sobre cómo estos desafíos duraderos podrían afectar de forma adversa la lucha de Nigeria contra la pandemia.

Al inicio de la pandemia en Nigeria, escuché a varias personas en mi comunidad decir que el hambre mata más rápido que el virus. Aunque no hay evidencia científica para respaldar la

1 Aunque hubo un confinamiento total, el Gobierno estableció un horario de cuatro horas diarias para servicios esenciales, como comprar comida.

veracidad de esta afirmación, debajo de ella yace la realidad de los pobres y vulnerables de que en estos tiempos inciertos, mientras las personas tratan de mantenerse a salvo del virus, hay otro virus del cual deben protegerse: el hambre.

Nigeria es considerado uno de los países más ricos de África y actualmente es la economía más grande del continente, con un PIB de US \$448 mil millones (Banco Mundial 2019). Al mismo tiempo, Nigeria alberga una de las poblaciones más pobres del planeta, de 82,9 millones de personas (o el 40% de la población del país) que viven por debajo de la línea de pobreza (Oficina Nacional de Estadística 2020). Según un informe reciente de Oxfam, la riqueza acumulada de sólo cinco nigerianos podría sacar de la pobreza y el hambre extremo a millones de nigerianos (Oxfam 2019). Esta desigualdad de riqueza se aumenta por un sistema bastante corrupto: Nigeria tiene un índice de percepción de corrupción de 26 de 100 (en donde 0 significa altamente corrupto y 100 es limpio), lo que lo ubica en el país 146 de 180 (Transparencia Internacional 2019). Dados estos desafíos socioeconómicos, se esperaría que el impacto económico de la pandemia golpee más fuerte a todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo a los pobres y vulnerables. Para mitigar este impacto potencial de la pandemia, el gobierno ha aprobado un paquete de estímulos que le otorgan una transferencia única en efectivo de 20 000 naira (unos US \$52) a 3,6 millones de hogares pobres y vulnerables (Ereyi 2020). Sin embargo, esta medida es sólo una gota en el océano si consideramos que más de 80 millones de personas viven en pobreza.

Otro problema que trajo a relucir la pandemia es el nivel de confianza que tienen los ciudadanos en la capacidad del Gobierno de responder de forma adecuada a la crisis. Esta falta de confianza es producto de muchos años de repetidos fracasos en la protección de las vidas y la propiedad de las personas, así como de años de corrupción y mal manejo de recursos. Desde ya, el Gobierno ha sido criticado por no tomar medidas proactivas para prevenir el contagio del virus desde que se reportó el primer caso el 28 de febrero de 2020. Una de las consecuencias de esta falta de confianza se refleja en la actitud de algunos ciudadanos hacia la pandemia. Algunos creen que el virus no existe, al menos no en Nigeria. Ellos creen que es una estratagema del Gobierno. Una vez, cuando intenté comprar algo de carne fresca de un vendedor

en el mercado local cerca de donde vivo, le pregunté por qué estaba vendiendo carne sin tapabocas o guantes. De forma displicente, y para mi gran sorpresa, me respondió que no hay coronavirus en Nigeria y que el Gobierno lo estaba inventando para obtener dinero. Esta experiencia reveló que, a pesar de los lineamientos de seguridad establecidos por el Gobierno, el nivel de cumplimiento puede verse afectado debido a la percepción de que el virus no existe. Aunque el Gobierno está invirtiendo en campañas de concienciación, el éxito de estos esfuerzos va a estar determinado por la apatía general y la falta de confianza en el Gobierno de parte de los ciudadanos.

Quizá pueda ser difícil criticar la actitud de los ciudadanos, pues el Gobierno desobedece sus propios lineamientos. Ha habido reportes del incumplimiento total de las reglas de distanciamiento social de parte de funcionarios públicos, lo cual generó preocupación sobre cuán bien está haciendo cumplir el Gobierno los lineamientos (Egbunike y Ajayi 2020). Un ejemplo de ello fue una experiencia que tuve en mi mercado del barrio poco después de una apertura inicial. Como lo estipulan las autoridades, todas las personas deben llevar un tapabocas en espacios públicos. Al acercarme a la entrada del mercado, me di cuenta de que había una discusión entre un funcionario público y un hombre que estaba en la entrada para asegurar que se estaban cumpliendo los lineamientos contra la Covid-19. Pronto me di cuenta de que el funcionario estaba insistiendo en que lo dejaran pasar al mercado sin usar un tapabocas. Mientras discutían, se formó una pequeña multitud que esperaba entrar al mercado y que observaba consternada. En este punto, me acerqué para abordar al funcionario y recordarle que las autoridades establecen las reglas y deben ser ejemplo de su cumplimiento. Decepcionado y avergonzado, se retiró y con ello pudieron entrar las otras personas que estaban vestidas de forma apropiada. Esta experiencia también revela la actitud de algunos funcionarios públicos que creen que están por encima de la ley. Si las autoridades se rehúsan a respetar sus propios lineamientos, están enviando un mensaje claro a los ciudadanos para que tampoco no se los tomen en serio. En ese sentido, contribuyen a la narrativa que niega la existencia del virus.

Además, la transparencia con la que el Gobierno está abordando la pandemia ha generado varias preguntas entre los

ciudadanos. Por ejemplo, ha habido llamados para rendir cuentas de los dineros donados por individuos e instituciones para dar respuesta a la pandemia (“Nigeria: Accounting for COVID-19 Funds” 2020). De forma similar, hay dudas acerca de la confiabilidad de las cifras presentadas por el Gobierno, en particular si representan la escala real de la pandemia. Aunque algunas personas creen que las cifras están infladas por razones políticas o como un medio para obtener más dinero, otras creen que las cifras subestiman la escala de la pandemia (Adepoju 2020). Cabe anotar que Nigeria tiene un sistema de manejo de datos e información pobre, lo cual se convierte en un contratiempo en su respuesta a la pandemia. La sombra de duda en la precisión de los datos y la transparencia con la que el Gobierno ha liderado su respuesta sólo exagera la falta de confianza de los ciudadanos, lo cual a su vez alimenta la indiferencia y la negación acerca de la existencia de la pandemia, así como el irrespeto a los lineamientos.

Quizá uno de los problemas más evidentes que evidenció la pandemia es la corrupción y el deterioro del sistema de salud del país. La corrupción en el sistema de salud de Nigeria se manifiesta a través de los sobornos, la poca financiación, el robo de medicinas, el ausentismo, la infraestructura inadecuada y las bajas condiciones laborales (Anti-Corruption Evidence 2020; Tormusa e Idom 2016). Aunque los pobres y los más vulnerables en su mayoría han pagado el costo del deterioro del sistema de salud, en un giro irónico durante la pandemia, las autoridades que no han logrado asegurar un sistema de salud efectivo y funcional ahora están obligados a utilizar el mismo sistema para su propia atención sanitaria. Antes de la pandemia, era común que los funcionarios y los ricos buscaran asistencia médica en el exterior. Ahora, sin embargo, hacerlo se ha vuelto un lujo que ni siquiera los ricos y más poderosos pueden darse, dadas las restricciones a los viajes. Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia, es la necesidad urgente de arreglar el sector de la salud.

Conclusión

Nigeria sigue su lucha contra la Covid-19 entre los desafíos duraderos de corrupción, falta de confianza, pobreza, desigualdad y un sistema de salud débil. En un momento en el que los esfuerzos colectivos y la cooperación se necesitan para ganar la batalla

contra el coronavirus, estos desafíos pueden debilitar de forma significativa los esfuerzos del Gobierno nigeriano para contener el contagio del virus y responder a los miles de casos confirmados. Para tener éxito en su respuesta, el Gobierno debe ganarse la confianza de los ciudadanos. Esta última también es la piedra angular para abordar problemas más grandes de corrupción y desigualdad, los cuales, a su vez, pueden aumentar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno. La pandemia brinda una buena oportunidad para que el Gobierno construya esta confianza y demuestre que puede hacer las cosas bien. Aunque esperamos que la pandemia termine lo más rápido posible, las lecciones que nos ha enseñado nos deberían llevar a abordar los problemas más profundos que se han resaltado. Lo que es claro es que la Covid-19 ha expuesto la pobreza, la desigualdad de ingreso, la corrupción y la falta de confianza en Nigeria, y el Gobierno debe abordar estos problemas de forma inmediata para construir un país que atienda a los ricos y a los pobres, en todo momento.

Referencias

Adepoju, P. (2020). "Politics Gets in the Way of Nigeria's COVID-19 Response". *Devex*, 17 de julio. Disponible en: <https://www.devex.com/news/politics-gets-in-the-way-of-nigeria-s-covid-19-response-97720>.

Anti-Corruption Evidence. (2020). "What Could Work to Curb Health Sector Corruption and Improve Health Outcomes?". Disponible en: <https://ace.soas.ac.uk/health-providers-nigeria>.

Banco Mundial. (2019). "Data: Nigeria." <https://data.worldbank.org/country/nigeria>.

Egbunike, N. y R. Ajayi. (2020). "A High-Profile Funeral Highlights a Double Standard in Nigeria under Lockdown". *Global Voices*, 23 de abril. Disponible en: <https://globalvoices.org/2020/04/23/a-high-profile-funeral-highlights-a-double-standard-in-nigeria-under-lockdown>.

Ereyi, D. (2020). "Nigeria Government Begins Distribution of N20,000 Relief Fund to Homes". *Guardian*, 1 de abril. Disponible en: <https://guardian.ng/news/nigeria-government-begins-distribution-of-n20000-relief-fund-to-homes>.

"Nigeria: Accounting for COVID-19 Funds". (2020). *This Day*, 5 de junio. Disponible en: <https://allafrica.com/stories/202006050076.html>.

Oficina Nacional de Estadística. (2020). *2019 Poverty and Inequality in Nigeria: Executive Summary*. Abuja: Oficina Nacional de Estadística.

Oxfam. (2019). "Nigeria: Extreme Inequality in Numbers". Disponible en: <https://www.oxfam.org/en/nigeria-extreme-inequality-numbers>.

Tormusa, D.O. y A. M. Idom. (2016). "The Impediments of Corruption on the Efficiency of Healthcare Service Delivery in Nigeria". *Online Journal of Health Ethics* 12(1).

Transparencia Internacional. (2019). "Nigeria." <https://www.transparency.org/en/countries/nigeria#>.

CAPÍTULO 4

La virtualidad: un arma de doble filo en tiempos de la Covid-19

Natalia Mendoza Servín
(México)

En mi opinión, considero que los seres humanos somos capaces de lo más sublime y de lo más atroz. Esta pandemia de la Covid-19 ha sacado a la luz estas dos facetas de las personas que habitamos este mundo. En este artículo, quiero enfocarme en cómo se encuentran actos sublimes y atroces también en los espacios virtuales, los cuales se introducen ahora de forma vertiginosa en todos los ámbitos de la vida de las personas.

Yo he sido testigo de muchos actos sublimes en esta contingencia. Por ejemplo, ante la falta de cubrebocas, muchas personas los están elaborando con materiales caseros para regalarlos. Otras están donando comida para quienes no tienen un trabajo fijo y que se han visto afectados por el problema sanitario.

En mis redes sociales se han difundido imágenes hermosas que nos incitan a seguir adelante, a pesar de lo difícil que se ha tornado la situación. Algunas son graciosas o alentadoras (¡viva el ingenio mexicano!) y otras, profundas, pero todas tienen el mismo objetivo: unirnos y darnos fuerza. Una de mis favoritas (que ha circulado como especie de meme), es esta que dice “Volveremos a abrazarnos”.

La virtualidad nos ha ayudado mucho en esta contingencia. En mi caso, gracias a ella, he podido estudiar, dar mis clases y estar en contacto con mis familiares y amigos. Y como yo, hay muchas personas que la han usado para facilitar actividades similares. Además, las actividades económicas no pueden parar; hay muchos servicios que requieren continuidad, lo cual implica que miles de personas deben ponerse en situaciones de riesgo. Para dar tranquilidad a esos trabajadores, cumplir con las disposiciones gubernamentales en materia de salud y para no frenar de golpe todas las actividades, muchos mexicanos hemos optado por usar medios virtuales.

Los actos sublimes a los que me he referido antes han ayudado a mitigar las preocupaciones de las personas. Las buenas acciones ante la pandemia han llegado al ámbito económico, psicológico, físico, laboral e incluso a otros seres vivos. No obstante, estos actos sublimes tienen su “otra cara de la moneda”, que justamente son los actos atroces que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, algunas personas han lanzado cloro al personal de sanidad por considerar que podían infectarlas del virus. Aquí quiero hablar de uno de esos actos atroces que va contra el derecho humano a la privacidad y protección de datos personales, materia a la que me he dedicado un buen tiempo.

El problema vino cuando personas siniestras lograron que la virtualidad se volviera atroz, nefasta y que violara un derecho fundamental: a la intimidad y la vida privada. En México existen muchas plataformas que ofrecen servicios de videoconferencia, como Zoom, Google Meet, Telmex o Facebook Time. En este periodo de contingencia se han vuelto muy concurridas para trabajar o para mantener relaciones personales. Voy a referirme al caso de Zoom porque ha tenido relevancia en México por no respetar la privacidad de los individuos. Ello no quiere decir que las otras sean cien por ciento confiables, pero cuando menos no ha habido escándalos documentados.

Si se ingresa a la página principal de Zoom, se puede leer este texto que hace referencia a la pandemia: “Hemos desarrollado recursos para ayudarle durante esta difícil etapa. Haga clic aquí para obtener más información”.

Al darle clic al enlace¹, Zoom nos informa que nos ayudará mediante su plataforma a resolver alguno de los siguientes temas: (i) teletrabajo; (ii) educación; (iii) celebración de eventos virtuales; y (iv) telemedicina. En principio, Zoom nos ofrece una herramienta sublime; ¡podemos hacer todo, incluso ir a consulta sin arriesgar nuestra salud ni la del médico!

¿Tantas bondades eran gratis? Pues no. Esta plataforma no sólo traiciona la confianza de sus usuarios, sino que también nos recuerda la parte atroz de nuestra humanidad. Esas bondades tuvieron un costo alto y ese fue que Zoom expuso nuestros datos

1 Disponible en <https://zoom.us/docs/es-es/covid19.html>

personales en la web profunda. De acuerdo con la revista *Proceso* (2020), la compañía de ciberseguridad Cyble ha alertado sobre la presencia de más de 500 mil cuentas de usuarios de Zoom que están a la venta en la web profunda.

En esas llamadas de Zoom, los usuarios hablamos sobre nuestras vidas privadas, nuestros trabajos y nuestro estado de salud. Allí damos datos que pueden llegar a ser sumamente sensibles e incluso generar discriminación. Por ejemplo, imaginen que una persona ha ventilado por Zoom que padece de Covid-19. Al hacerse pública esta información, es posible que ella sea atacada con cloro, al igual que el personal médico del que hablé líneas arriba. Toda esa información está al alcance de personas atroces, con intenciones desconocidas que por una pequeña cantidad de dinero pueden obtener información que en ningún momento autorizamos compartir con terceros.

Zoom quizá alegrará que no nos engañó, que son los hackers las personas atroces y que ellos son parte del grupo sublime que quería ayudar. No obstante, de conformidad con las leyes de privacidad, al menos de México, es obligación de los particulares proteger la información confidencial en su poder. El incumplimiento de la norma también es deshonesto, ¡también es atroz!

¿Qué podemos hacer? En principio, denunciar. Hacer valer nuestro derecho a la privacidad y obligar a las autoridades mexicanas a hacer justicia frente a los abusos y atrocidades cometidos por aquellos que se aprovechan de una situación delicada y que meten un caballo de Troya “sublime” a nuestras vidas. Después de ello, procurar utilizar plataformas serias y verdaderamente comprometidas con la protección de datos.

Al respecto, valdría la pena que México considerara alguna plataforma digital que pueda usarse en tiempos de la pandemia sin poner en riesgo la privacidad de sus habitantes. Sin embargo, en el contexto mexicano relacionado con la pandemia y los medios de comunicación, tanto ciudadanos de a pie como autoridades han decidido utilizar plataformas ya existentes, como Zoom.

El derecho —aunque muchos lo duden, y con justa razón—, puede ser una herramienta sublime que ayuda a neutralizar actos atroces. La virtualidad que en tiempos de la pandemia nació sublime y se volvió atroz, puede volver al círculo virtuoso si usamos recursos legales como el de la protección de datos, que nos

permitan luchar contra los que osan degradar el espacio virtual que en muchos sentidos nos ha favorecido en esta contingencia.

Al final de todo esto, es importante decir que la violación a la privacidad por parte de Zoom nos deja en México algunos temas de reflexión sobre los problemas latentes y de fondo del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.

Primero, hace falta implementar una cultura de la protección de datos en las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Si bien es cierto que Zoom no tendría por qué quebrantar la Ley de Datos, considero que quienes somos usuarios de plataformas digitales podríamos optar por una que respete más nuestra privacidad, quizá Signal. Segundo, hace falta que las autoridades mexicanas exijan a empresas nacionales y extranjeras dedicadas a los servicios de videoconferencia el cumplimiento a las leyes de privacidad en el país, con el objeto de no dejar toda la carga a la ciudadanía. Y por último, resalto de forma particular el fortalecimiento de la cultura de la denuncia. Quien incumple la ley debe ser sancionado y creo que los ciudadanos debemos comprometernos con ello. Con las denuncias nos devolvemos a todos los espacios sublimes de la vida, incluso los virtuales.

Si logramos que estas reflexiones pasen del imaginario a la realidad, estaríamos generando acciones sublimes que ayudarían a recuperar, reparar y potencializar otras que nacieron sublimes, pero que por diversas razones se volvieron atroces. En ese sentido, considero que el trabajo de la sociedad civil es fundamental para la creación y transformación de acciones sublimes. Por eso, debemos trabajar juntos por acciones sublimes que permitan sobrellevar cualquier tiempo de crisis, como el que ahora nos ha tocado vivir.

Referencias

Proceso. (2020). "Más de 500 mil cuentas de usuarios de Zoom se venden en la Dark Web". 14 de abril, disponible en: <https://www.proceso.com.mx/625756/mas-de-500-mil-cuentas-de-usuarios-de-zoom-se-venden-en-la-dark-web>

CAPÍTULO 5
Invisibles
ante la pandemia de la Covid-19
en República Dominicana

Ana María Belique
(República Dominicana)

En un hecho histórico en mi país, República Dominicana, en febrero se suspendieron las elecciones municipales. A las 11:11 a.m., el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) habló a la nación para comunicar que las elecciones se suspendían por un presunto fallo en el sistema de voto electrónico. Era la primera vez en el país que se utilizaba dicho sistema y, desde antes de implementarse, hubo críticas acerca de su efectividad. La suspensión hizo que diferentes actores políticos manifestaran que se trataba de un intento de fraude electoral. A partir de ese momento, un grupo de jóvenes se levantó para exigir respuestas al porqué se suspendieron las elecciones y que se hicieran sanciones a los responsables del sabotaje. Los Manifestantes de la Plaza de la Bandera, como se les denominó, se lanzaron a las calles diariamente vestidos de negro en la Plaza de la Bandera frente a la JCE para pedir elecciones libres y transparentes.

El 15 de marzo el pueblo volvió a las urnas para concluir el proceso fallido de febrero. Muchas personas fuimos a votar, en un momento en que ya teníamos registrados los primeros casos importados de la Covid-19 en el país. Todos sabíamos de las amenazas de la enfermedad; sin embargo, fuimos a las urnas con las medidas de precaución ante un clamor nacional a favor de la democracia y la constitucionalidad.

Hasta ese momento creo que muchos ignorábamos cuál sería la dimensión de esta pandemia para nuestro país. En ese momento la mayoría no tomaba muy en serio aún la prevención ni había casos registrados hasta el momento en nuestro pueblo. Acudí a votar, pero tomé medidas para evitar el contagio: usaba mascarilla, procuré mantener mi distanciamiento de las demás personas que estaban en la fila y de manera constante usaba el gel antibacterial.

Durante ese tiempo no estaba tan preocupada por los efectos sociales y económicos que este virus podría acarrear en el país. Tal vez no estaba consciente de ello, pero sí estaba más preocupada por el acceso a los servicios de salud de la población, que ya es un gran problema. También estaba preocupada por mi propia situación, pues decían que las personas con enfermedades crónicas eran más vulnerables y debía tomar todas las medidas necesarias.

Inmediatamente después de las elecciones municipales, el Gobierno dominicano decretó el Estado de emergencia y toque de queda, por lo cual estaban restringidos los horarios de movilidad de todas las personas en las calles. Las primeras dos semanas fueron de extrema ansiedad al saber que estás obligado a permanecer en casa y salir cuando fuera realmente necesario en el horario permitido. Además, yo tenía otras inquietudes relacionadas a la población con la cual he trabajado en los últimos diez años.

El Estado dominicano ha venido implementado políticas discriminatorias que afectan los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, comunidad de la cual soy parte. Desde 2007, la JCE ha desarrollado políticas administrativas de desnacionalización de esta población. Esas medidas iniciaron con la circular 017 y la Resolución 012 de 2007, en las que se instruía a los oficiales del Estado civil dominicano abstenerse de emitir actas de nacimiento o cédula de identidad que presentaran ciertos errores como; tachaduras, inscripción borrosa, inscripciones con colores de tintas diferentes, entre otras. Aunque la resolución no mencionaba explícitamente a los hijos de inmigrantes haitianos, la circular sí y esto se utilizó como argumento para limitar el acceso a nuestros documentos (Belique 2019).

Los dominicanos de ascendencia haitiana se han visto limitados en el acceso a los documentos de identidad como la cédula y el acta de nacimiento. Sin estos es casi imposible realizar actos de la vida civil ordinaria como: tener un contrato de trabajo, comprar bienes, tener una cuenta bancaria, comprar un celular con chip, declarar el nacimiento de un hijo o tener el seguro social y de riesgo laboral. Existen programas de políticas sociales para ayudar a las familias dominicanas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, pero también se necesita la cédula de identidad para acceder a ellas.

Cada vez que un dominicano de ascendencia haitiana quiere procurar un extracto de su acta de nacimiento o su cédula de identidad y electoral y resolver así su situación de indocumentación, los oficiales del estado civil argumentaban que el documento estaba bajo investigación. Dicha investigación no tiene un plazo para concluir, lo cual produjo que miles de personas vean sus vidas paralizadas por falta de acceso a su documento de identidad. Esas medidas administrativas se convirtieron en normas en todo el país, lo que llevó a las instituciones de derechos humanos a visibilizar la realidad y afirmar que se trataba de una violación a los derechos humanos.

En mi caso he sido afectada por dicha política de desnacionalización por ser hija de inmigrantes haitianos en la República Dominicana. En 2009, cuando me acerqué a la Oficialía del Estado Civil de mi pueblo para obtener un extracto de mi acta de nacimiento, me fue negado. En aquel momento yo lo necesitaba para completar los documentos de ingreso a la universidad. Como no pude conseguir el documento, sólo logré ingresar a la universidad tres años después. En medio de este proceso de vidas suspendidas es que surge el movimiento Reconoci.do colectivo, del cual soy parte. Es un movimiento de jóvenes del batey¹ en su mayoría; un movimiento antirracista que combate las medidas del Gobierno fundamentadas en el racismo contra los haitianos y sus descendientes. Desde 2011, cuando se forma el movimiento, hemos llevado de manera activa acciones de movilización social, incidencia y procesos legales.

En 2013, el Tribunal Constitucional Dominicano se pronunció sobre el tema de la nacionalidad con el caso de Juliana Dequis cuando emitió la sentencia 168/13.² Esta decisión se aplicaría a todos los que tuviéramos las mismas condiciones de Juliana, ser hijos de inmigrantes en condiciones de irregularidad migratoria, nacidos desde el 1929 hasta el 2007. De esa manera el Tribunal

1 Los bateyes históricamente pertenecían a los ingenios y han sido administrados por estos, por tal razón han tenido sus propias autoridades al margen de la administración pública. En la actualidad, los habitantes de los bateyes agrícolas están constituidos, fundamentalmente, por personas inmigrantes haitianas y sus descendientes.

2 Sentencia TC 168/13, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 23 de septiembre de 2013.

Constitucional desnaturalizó de manera retroactiva a más de cuatro generaciones de personas nacidas en país.

De acuerdo con las últimas cifras publicadas, los hijos de inmigrantes haitianos somos el 2.7% del total de la población dominicana (ONE, 2017). Unos 133 000 estarían en riesgo de apatridia según el informe mundial para 2016 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Personas Apátridas (ACNUR 2017). Es un número considerable de la población que hace su vida en el país que los vio nacer pero que los ha excluido sistemáticamente y en el contexto de pandemia no ha sido la excepción.

Medidas del Estado dominicano frente a la pandemia de la Covid-19

Frente a la realidad de la Covid-19, el Estado dominicano adoptó varias medidas económicas que buscaban aliviar la situación de miles de personas afectadas por la pandemia. Diversas empresas suspendieron los contratos laborales de sus empleados, a lo cual el Estado respondió con el programa llamado Fase³, que aseguraba el pago mínimo para esos empleados de empresas que cumplieran con unos requisitos específicos. Cientos de trabajadores estaban siendo despedidos por el cierre de empresas durante la cuarentena. Mientras escribo esto, se reportó que 1 335 611 trabajadores habían sido afectados (Ramírez, 2020); sin embargo, no todos han recibido los beneficios de los programas del Gobierno.

Los programas de ayuda buscaban proteger la clase trabajadora formal y algunos trabajadores informales, jefes de hogar y personas con negocios que no pueden laborar a causa de la cuarentena. Las medidas adoptadas por el Estado dominicano para que las personas se quedaran en su casa y contaran con lo básico para comer serían de las más novedosas implementadas por el gobierno, pues comprenden la transferencia directa de recursos económicos. Así, a través del número de cédula de identidad los beneficiados podían comprar alimentos en una lista de establecimientos

3 Decreto 143-20, que crea el Fondo de Asistencia Social al Empleo (FASE 1) mediante el cual se otorga una transferencia monetaria no condicionada a trabajadores cuyos empleos se vean afectados a través de la suspensión de los efectos de contrato de trabajo durante la pandemia.

asignados por el Estado. Algunas de estas familias ya contaban con la Tarjeta Solidaridad⁴ del programa de asistencia social del Gobierno, y las que no la tenían la recibirían a través de la cédula después de llamar la línea de atención.

Estas medidas fueron un gran avance, pues cientos de miles de personas han podido obtener alimentos sólo presentando su cédula de identidad. Sin embargo, las personas en condición de indocumentación y apatridia no pueden beneficiarse de estas medidas por el simple hecho de que no cuentan con un documento de identidad nacional. Estas son las personas a las cuales acompaño; algunos se encuentran en la categoría de trabajadores informales (chiriperos), es decir, personas que trabajan por el día, ganan lo que hacen cada día y no tienen en su mayoría acceso al seguro social, por lo que las medidas para proteger las empresas y los trabajadores no les beneficiaría a ellos. Otro grupo de interés son las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana que en su mayoría son trabajadoras domésticas, cuyas labores se verían suspendidas y serían devueltas a sus casas sin ningún tipo de remuneración ni beneficios durante la cuarentena. Esta realidad es una situación común en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe pero los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana se ven afectados por la falta de documentación, lo que acarrea implicaciones más profundas.

No existió un plan especial para apoyar a esta población. Por tanto, quedaron completamente excluidos de los planes del Gobierno para frenar la crisis generada por la Covid-19 y se agravó su vulnerabilidad. No es la primera vez que somos excluidos; ya lo fuimos por la política de desnacionalización masiva a través de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano y por la Ley 169-14.

Además, a este grupo se les niega el derecho a participar en elecciones, elegir y ser elegido como consecuencia de no tener documentos de identidad. En el imaginario y la retórica de sectores conservadores, no somos dominicanos aunque nacimos en el país,

4 “Es un programa del Estado dominicano mediante el cual las familias vulnerables se involucran en un proceso de desarrollo integral, a través del cumplimiento de corresponsabilidades vinculadas a transferencias en efectivo que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional de sus miembros” (Progresando con Solidaridad s.f.).

y se han encargado de buscar todas las formas de marginalizarnos. Según ellos, somos haitianos y permitir que tengamos voz y voto en este país sería permitir una invasión pacífica de Haití. Esta idea de la invasión pacífica es uno de los argumentos utilizados por los grupos ultranacionalistas que han alimentado durante décadas el odio racial y antihaitiano en el país.

La crisis generalizada por la Covid-19 en la República Dominicana ha evidenciado los efectos directos de la desnacionalización y los niveles de desigualdad. El 2020 es un año electoral que ha estado marcado por múltiples incidentes, como la postergación de las elecciones municipales por fallos en el sistema electrónico y la de las elecciones presidenciales por la Covid-19.

Como dominicana de ascendencia haitiana, he sostenido que nuestra población no pretende vivir de la asistencia social del Estado. La historia de lucha histórica de resistencia y el trabajo de nuestros padres dan testimonio de ello. Aún así, en este momento de crisis todos necesitamos manos solidarias, pero el ultranacionalismo, el egoísmo y el racismo de unos pocos nos impiden gozar de algo tan básico como contar con una nacionalidad y una documentación que garantice el acceso a derechos. El Estado dominicano ha negado este derecho en un acto sin precedentes al convertir a cientos de personas en apátridas en su propia tierra.

A partir del 16 de agosto comienza un nuevo periodo en el país: se cierra un ciclo de casi veinte años del Partido de la Liberación Dominicana. Justamente en ese período se agudizaron todos los problemas relacionados con nuestra situación legal. No sé qué nos depara con las nuevas autoridades, pues ningún partido se ha posicionado públicamente para defender nuestros derechos como minoría, ya que hacerlo les restaría votos o hasta podría ser su sepultura política. Sin embargo, por la envergadura que implica esta realidad de miles de personas y por las exigencias de organismos internos e internacionales, el Gobierno se ve obligado a dar algunas respuestas. Deseo mantener vivas las esperanzas de que así será, pues somos invisibles para la élite gobernante y nos han excluido tanto que ni siquiera la asistencia social en medio de esta crisis le llega a nuestra población.

Ante ese panorama no queda otra cosa que continuar visibilizando estas realidades, continuar la lucha social y generar la solidaridad. En ese sentido, desde el movimiento Reconoci.do y

el colectivo We Are All Dominican lanzamos una colecta virtual para ayudar a algunas de las familias vulnerables de nuestra zona de trabajo. Durante los tres primeros meses de la pandemia y cuarentena logramos proveer de alimentos básicos a unas 200 familias que por todas las realidades descritas anteriormente no fueron beneficiadas con los planes gubernamentales. Esto fue posible gracias a personas conocidas y desconocidas que solidariamente en medio de la pandemia se desprendieron para ayudarnos cuando el Estado no lo hizo. A pesar de todas las barreras, seguimos avanzando y haciendo visibles realidades de vida invisibilizadas.

Referencias

ACNUR. (2017). "Panorama regional: Las Américas". Informe Mundial de 2016. Disponible en: <https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2018/11445.pdf>.

Belique, A. M. (2019). "La discriminación racial contra los dominicanos de ascendencia haitiana. Del Batey al activismo". En César Rodríguez Garavito (coord.), ¿Cómo pensar la desigualdad desde los derechos humanos? Nuevos abordajes para las injusticias sociales y económicas del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 19-43.

Oficina Nacional de Estadística. (2018). Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana -ENI 2017. Santo Domingo.

Pons, F. M. (1986). EL BATEY Estudio Socioeconomico de los bateyes del consejo estatal del azúcar. Santo Domingo, República Dominicana.

Progresando con Solidaridad. (S.f.). "Descripción". Disponible en: <https://progresandoconsolidaridad.gob.do/nosotros/descripcion/>.

Ramírez, J. (2020). "A julio de este año se han solicitado 128,986 suspensiones de empleados por la pandemia". Listín Diario, 2 de agosto. Disponible en: <https://listindiario.com/economia/2020/08/02/628888/a-julio-de-este-ano-se-han-solicitado-128986-suspensiones-de-empleados-por-la-pandemia>.

CAPÍTULO 6
Entre la Covid-19 y la horca:
Los prisioneros
con enfermedades mentales
en Pakistán

Sana Farrukh
(Pakistán)

Lideré el equipo de litigio en el Justice Project Pakistan, una organización no gubernamental pakistaní que representa a prisioneros vulnerables que enfrentan duros castigos tanto en el país como en el exterior. Entre las historias trágicas y frustrantes de nuestros clientes con penas de muerte, la de Kanizan Bibi es quizá la más desgarradora. Ella ha pasado treinta años en condiciones deplorables mientras espera su pena en Pakistán. Al momento de escribir este texto, y luego de haber sido trasladada durante décadas entre hospitales psiquiátricos y cárceles, está presa en la Cárcel Central de Lahore.

Kanizan tenía 14 años cuando conoció a la familia por cuyo asesinato sería condenada. Su madre había muerto y Kanizan trabajaba cuidando a una familia acaudalada en Toba Tek Singh, Punjab, para ganar el dinero suficiente para sostener a la suya propia. Dos años después de comenzar su trabajo, casi toda la familia fue asesinada, excepto su empleador Khan Muhammad. Diez días después de las trágicas muertes, cuando las autoridades no pudieron encontrar a los culpables, la policía arrestó a Kanizan y a su empleador. Dijeron que ellos dos habían tenido una aventura y que habían conspirado para matar al resto de la familia. Hasta su último día en 2003, cuando fue ejecutado, Khan Muhammad dijo que unos familiares lo habían incriminado debido a una disputa por unas propiedades. También sostuvo que Kanizan era inocente y que nunca había habido una relación ilícita entre ellos.

Kanizan ahora es una mujer de mediana edad. Durante los últimos dos años, la visitábamos un par de veces al mes después de un trayecto de más de cuatro horas por tierra desde Lahore hasta Rawalpindi, bajábamos del auto en la entrada principal (que está conectada a unos muros altos monitoreados por hombres

armados) y caminábamos por un camino seco y polvoriento hasta el área de registro. A veces se nos pedía acompañar al superintendente de la prisión a tomar el té. Otras veces nos negaban la entrada al edificio. Como abogada que representa a prisioneros con penas de muerte en Pakistán, tengo una relación algo temperamental con las prisiones que encierran a mis clientes. Desde que comenzó la pandemia de la Covid-19, mis interacciones con las prisiones se resumen a unas cartas sin respuesta y llamadas telefónicas apresuradas. Las prisiones se han vuelto aún más impenetrables que antes.

La primera vez que hice la travesía para visitar a Kanizan en la Cárcel Central de Rawalpindi, nuestra delegación se reunió primero con el superintendente de su oficina. Hubo bizcochos y té e intercambiamos algunas cortesías. La atmósfera jovial de estos funcionarios de la prisión, que está llena de “por favores” y “gracias” como si fueran cualquier otra oficina del Gobierno, oculta la desesperación silenciosa de miles de cuerpos encerrados unos metros más abajo.

Kanizan, que había sido traída de su celda, nos estaba esperando un par de pasillos más adelante. Ella sonreía pero casi no hacía contacto visual, y era difícil que respondiera nuestras preguntas. Me gustaría poder decir que sentí que ella entendía algo de lo que le decíamos, quiénes éramos, por qué fuimos y si algo podía cambiar.

La historia de Kanizan es tormentosa y muchas veces termino perdida en sus dolorosos detalles. Ella era una niña de 16 años cuando la policía la golpeó brutalmente y la electrocutó por casi quince días. Soltaron ratas en su pantalón, que habían amarrado en las botas para que las ratas no pudieran escapar. Los vecinos que vivían cerca de la estación de policía escucharon sus gritos. Con base en su falsa confesión, fue condenada y sentenciada a muerte y ahora ya ha pasado unos treinta años tras las rejas.

Después de vivir en unas condiciones carcelarias deplorables y de sufrir problemas de salud mental severos, en 2000 le diagnosticaron esquizofrenia y la trasladaron a unas instalaciones de salud mental para su tratamiento. En 2017 la llevaron de forma abrupta de nuevo a la Cárcel Central de Lahore por razones administrativas, lo cual la privó del tratamiento médico crítico que merece. En 2018, el presidente del Tribunal Supremo de Pakistán

se enteró de su caso y ordenó que se realizara una evaluación de salud mental; con base en los resultados, recomendó que su caso fuera considerado para su conmutación. Él afirmó que “se escapa de todo sentido y razón que ejecutemos a individuos con enfermedades mentales” y con base en ello, la trasladaron de nuevo a unas instalaciones de salud mental (Bilal 2018).

Algunos dicen que Kanizan dejó de hablar poco después de haber sido torturada por la policía a los 16 años. Ahora ya pasó los 40. Sabemos a ciencia cierta que no ha hablado una sola palabra en al menos una década.

Como en muchos otros trabajos, el trabajo con prisioneros requiere de un desapego emocional. En general, mi miedo de que le estamos fallando a nuestros clientes de alguna manera es un murmullo bajo y continuo que sube y baja en la boca de mi estómago. Luego se convirtió en anticipación nerviosa por unos pocos días a principios de marzo, cuando nuestra organización hizo una campaña a nombre de Kanizan en el Día Internacional de la Mujer, en aras de que su caso fuera pudiera llegar al Tribunal Supremo. Algunas organizaciones de la sociedad civil firmaron un comunicado conjunto y marchamos por ella en la Marcha Aurat, una marcha anual de mujeres a lo largo del país. Y funcionó: la fecha de su audiencia fue asignada para el 30 de marzo. Después de dos años de inacción de parte del tribunal, ella finalmente podría tener el chance de ser libre.

Pero luego se declaró la pandemia de la Covid-19. Una vez más, el caso de Kanizan se pospuso indefinidamente. En todo el mundo se han cancelado audiencias, lo cual ha traído consecuencias arduas para muchas personas tras las rejas.

Sin embargo, mi preocupación más inmediata en este momento no es la libertad de Kanizan sino su bienestar. Ella pasó los primeros tres meses de la pandemia atrapada en la hacinada Cárcel Central de Rawalpindi, donde fue remitida para que se hiciera la evaluación de salud mental que la pudo liberar. Kanizan tiene una enfermedad mental severa. El trauma la enmudeció, pocas veces reconoce a las personas que ya deberían ser familiares para ella y, algunos días, no puede comer o vestirse a sí misma. Cuando mi colega la visitó por última vez, antes de que hubiera una prohibición indefinida a las visitas en la cárcel, Kanizan estaba llorando y se veía angustiada en extremo pero no podía decir qué le

sucedía. Le pidió a mi colega que escribiera su número telefónico. Pensar en eso me aflige: incluso si ella recuerda después la visita, ¿qué iba a hacer con el número de mi colega? ¿Quién la ayudaría a llamarnos? ¿Cómo le podía decir al personal de la cárcel lo que quería decir?

Me preocupa que Kanizan no pueda revivir la autoconciencia necesaria durante una pandemia, pues es alguien que no está consciente de su entorno en la vida diaria. Kanizan está en una celda para presos condenados a muerte, muchas de las cuales no tienen acceso a un inodoro que funcione. Más aún, es poco probable que tome las medidas preventivas como el lavado de manos frecuente y riguroso. Puede que no sea capaz de comunicar sus necesidades al personal o incluso tener la presencia mental para saber cuándo está experimentando síntomas preocupantes.

El primer caso de Covid-19 en prisiones de Pakistán fue reportado el 23 de marzo de 2020. Para el 23 de abril, hubo 98 casos confirmados; pero dado que las pruebas son limitadas, es posible que el número real sea más alto. El hacinamiento, las condiciones poco sanitarias y el bajo presupuesto hacen de las prisiones un lugar óptimo para el aumento de una enfermedad contagiosa.

A principios de junio hubo un brote de Covid-19 en la Cárcel Central de Rawalpindi, donde Kanizan y tres de nuestros otros clientes con enfermedades mentales estaban detenidos. El doctor de la cárcel, quien examina de manera rutinaria a los prisioneros, resultó positivo y había contagiado a un prisionero que estaba en juicio. Hay una altísima falta de pruebas en estas cárceles y nuestros clientes están a la merced de la negligencia de las autoridades.

Para finales de junio, Kanizan por fin había sido trasladada de la Cárcel Central de Rawalpindi a la de Lahore, lo cual era el primer paso para llevarla de vuelta a las instalaciones de salud mental que necesita. Sin embargo, ahora estamos a principios de septiembre y parece que sólo fue trasladada de una prisión hacinada a otra.

A pesar de las dificultades de los abogados para visitar a sus clientes durante la pandemia, pude visitar a Kanizan en agosto. No me reconoció. Hablé con ella, aunque no era claro que me pudiera entender. Cuando le pregunté si prefería esta cárcel que la de Rawalpindi, empezó a llorar y a negar su cabeza, e hizo gestos como si estuviera esposada. Le sostuve la mano y le dije que nadie

la iba a llevar a ningún lado, que estábamos ahí para ayudarla. Por unos breves segundos sentí que me entendió. Me agarró la mano con fuerza y lloró aún más. Luego puso su mano en mi cabeza y me agradeció por algo que yo todavía no había hecho.

Le pedí a Kanizan que intentara escribir sus respuestas a mis preguntas. Le tomó mucho tiempo, pero al final, las pocas frases quebradas que garabateó fueron suficientes para tener un impacto duradero:

Esa gente que es cruel, ¿por qué ni siquiera la pican los mosquitos? Los que asesinan son salvados. Los que no asesinan viven en cárceles como huérfanos. He estado en una cárcel durante diez años. Tengo una hija. Quiero ir a donde está ella.

La superintendente asistente me informó que Kanizan llora a menudo y que cuando se le pregunta por qué, dice de forma limitada que es inocente y que está atrapada en la cárcel. Kanizan no tiene una hija; es posible que se refiera a alguien con quien interactuó mientras estaba en el Instituto de Salud Mental de Punjab. La mente de Kanizan no procesa la gravedad temporal de la injusticia que le ha ocurrido. Ha estado en la cárcel tres veces más de lo que piensa. Treinta años de encarcelamiento le han arrebatado muchas cosas, pero es aparente que nada puede ocultarle la gran injusticia que ha enfrentado. Aquí está Kanizan quien, a pesar de sus aflicciones, se apoya en su sentencia injusta como uno de los últimos hechos que conoce.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos establecen que “los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad” (UNODC 2015). El Reglamento de Prisiones de 1978 de Pakistán, que está actualmente en un proceso de reforma, pretende llevar el régimen administrativo de las prisiones en línea con las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, incluso cuando existen reglas, rara vez se siguen en espíritu. Por ejemplo, la regla 146 estipula la liberación de prisioneros debido a razones de edad mayor, enfermedad o debilidad. Nunca se ha aplicado.

En este momento, estamos buscando a la “hija” de Kanizan y estamos preparando una petición para adelantar la audiencia ante el Tribunal Supremo. Kanizan ha sido seleccionada como uno de los casos de estudio de un informe acerca de las prisioneras

publicado por el gobierno federal en agosto de 2020. En Justice Project Pakistan apuntamos a todas las direcciones y tengo fe en que a través de estos esfuerzos, Kanizan va por fin a ser libre. Con nuestros clientes es común que haya una pérdida tras otra hasta que algo funciona de repente, y gracias a ello hay una persona menos en una celda que quizá ni siquiera merecen los culpables, y mucho menos alguien como Kanizan. Por ahora, mientras la Covid-19 amenaza las vidas de prisioneros vulnerables alrededor del mundo, estamos trabajando más duro que nunca para volver a llevar a Kanizan a unas instalaciones de salud mental donde pueda estar a salvo.

Por fuera de la cárcel, el distanciamiento social es un privilegio para unos pocos. En las prisiones, es inconcebible. Dentro de la cárcel, los derechos básicos se ven como privilegios: el espacio personal es un privilegio, la agencia de lavarse las manos es un privilegio, buscar tratamiento es un privilegio. Aunque estén sentenciados a la cárcel, y a veces a la muerte, estos custodios del Estado no están sentenciados a la descomposición. Pero el brote incontrolado de la enfermedad muestra una verdad diferente. Nuestra creencia en el derecho a la salud de los prisioneros es tan débil como nuestra inmunidad de cara a la plaga de nuestros días.

Referencias

Bilal, R. (2018). "Beyond Sense or Reason That We Execute Mentally Ill Individuals: Chief Justice." *Dawn*, 21 de abril. Disponible en: <https://www.dawn.com/news/1402991>.

UNODC. (2015). "Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos". Disponible en: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf

CAPÍTULO 7
La autodeterminación:
La resiliencia propia
de las comunidades indígenas

Mary Louise Dumas
(Filipinas)

“No voy a dudar. Mis órdenes, tanto para la policía como para el ejército, incluido el *barangay*, son: si hay caos y sus vidas están en riesgo y ellos se resisten, dispárenles a discreción”, dijo el presidente Duterte en su actualización televisada acerca de los esfuerzos del gobierno contra el virus.

Esto llegó luego de que algunos residentes de comunidades urbanas pobres protestaron y fueran arrestados el 1 de abril. Los residentes se habían quejado de que no recibieron ningún apoyo del gobierno desde la imposición del confinamiento a mediados de marzo en el área metropolitana de Manila. El confinamiento significó dos semanas de inmovilidad y, para la mayoría (si no todas) las personas que subsisten con salarios diarios, esto significó estar dos semanas sin una comida decente. El presidente dirigió su amenaza a estas comunidades: “No voy a dudar en ordenarles a la policía a arrestarlos y detenerlos. Y si son detenidos, ustedes deben buscar su propia comida”.

El confinamiento más brutal

El área metropolitana de Manila experimentó el confinamiento más largo y más brutal en el mundo. Yo tuve la fortuna de vivir al sur del país en ese momento. Nuestra ciudad era un área de riesgo medio, y nuestros primeros pacientes llegaron sobre todo de otras partes de la región porque tenemos un centro de atención. Nuestro alcalde se rehusó a imponer una “cuarentena comunitaria aumentada”, pues dijo que quería mantener la mayor normalidad posible.

Pero la historia era distinta en el resto del país. Mi amiga que estaba atrapada en el área metropolitana de Manila me dijo que la policía de allá usaba el equipo de batalla completo. Dijimos en

broma que quizá querían dispararle al virus o asustarlo con sus armas y bombas. Pero en realidad estábamos preocupadas por cómo harían los sectores pobres para sobrevivir el confinamiento; de repente, la gente que había estado viviendo apenas con lo justo estaban sin trabajo y había poco apoyo del gobierno. Y cuando decidieron protestar, los convirtieron en los villanos de la pandemia.

Al principio del brote, el presidente Duterte se rehusó a suspender los vuelos desde y hacia China, incluso mientras la enfermedad ya empezaba a extenderse a dieciocho países y ya había pacientes en un monitoreo cercano en las Filipinas. Fue sólo después de que se confirmara el primer caso que él emitió una orden para detener la entrada de visitantes extranjeros al país.

Sin importar si el gobierno estaba siendo complaciente con China, que es un gran apoyo económico a la administración actual, las consecuencias resultaron siendo desastrosas. Luego de un pico en el número de contagiados en el área metropolitana de Manila, el gobierno declaró un confinamiento para esa zona el 15 de marzo de 2020. De forma poco sorprendente, la respuesta del gobierno a la pandemia fue militarista. De nuevo llegó una solución de “dispararles a todos” de parte del presidente, así como había respondido a otros problemas del país, por ejemplo, la sangrienta campaña antidrogas y los ataques intensificados contra activistas y críticos del gobierno.

Al sur

Nuestra institución, el Instituto Samdhana, trabaja sobre todo con pueblos indígenas y comunidades locales. Cuando nuestra ciudad, Cagayan de Oro, fue declarada en cuarentena comunitaria, fue difícil llegar a quienes estaban fuera la ciudad. Escuchamos rumores de que, en otros lugares del país, las empresas estaban aprovechando la situación para entrar a territorios ancestrales.

“Buenas tardes. Ya no nos dejan salir de nuestras casas”, decía un mensaje de Datu Benjie, un líder de la comunidad indígena Serukadang Menuvu, una de nuestras comunidades indígenas aliadas.

Intenté responderle con un mensaje de calma. Le dije que en otras partes del país pasaba lo mismo, pues muchas regiones habían impuesto bloqueos fronterizos y cuarentenas comunitarias. Le pedí buscar dónde podían conseguir “pases de cuarentena”

para miembros de la comunidad, lo que le permitiría al menos a un miembro de cada hogar salir a comprar comida.

Pero yo sabía que la preocupación de la comunidad provenía de sus circunstancias incluso antes de la pandemia de la Covid-19. La comunidad Serukadang Menuvu, la cual vive en Don Carlos, Bukidnon, había estado haciendo una serie de reclamos territoriales. Desde hace tiempo, esta pequeña comunidad había estado rodeada de cultivos de caña y fincas de monocultivos que tenían permisos del Estado. Antes de la aprobación de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas, las tierras de la comunidad habían sido clasificadas como bosques maderables, lo cual según la ley filipina significaba que el Estado podía otorgar permisos sobre la tierra a cualquier persona o empresa. Dado que la comunidad indígena era en su gran mayoría analfabeta y no sabía de estos arreglos sobre el manejo de tierras, estos permisos eventualmente cubrieron sus tierras ancestrales. Los individuos con dinero e influencia también podían obtener títulos privados e partes del territorio indígena.

La Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que protege los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, fue aprobada en 1997. Estipula que los pueblos indígenas tienen derechos previos a su territorio ancestral y tienen el derecho de reclamar tierras que hayan sido arrebatadas de forma injusta. Más aún, tienen el derecho a cualquier tierra que haya sido clasificada anteriormente como pública, es decir sin título, que estuviera dentro de su territorio ancestral. Sin embargo, la comunidad Serukadang Menuvu se enteró de esta ley hasta hace poco, después de estar expuesta a distintas reuniones de pueblos indígenas a través de nuestra alianza. Pero inmediatamente reivindicaron sus derechos y comenzaron a titular pequeñas áreas de su territorio ancestral donde habían expirado los permisos de los cultivos y las fincas.

Estas áreas, sin embargo, no son grandes. Hasta ahora, la comunidad ha podido reclamar sólo dos hectáreas. Y no ha sido fácil. Una vez, mientras hacían el *bayanihan*, o el cultivo colectivo como comunidad, el dueño del permiso anterior trajo su tractor y destruyó su trabajo y casi atropella a la anciana matriarca del clan de Datu Benjie. A pesar de esto, la comunidad persistió. Con ese pequeño pedazo de tierra, han podido plantar maíz, otros vegetales y distintos tipos de frutas.

En marzo de este año, ellos intentaron reclamar dos hectáreas más de tierras. Pero esta vez fueron recibidos con mayor resistencia por el dueño del permiso, quien llegó acompañado por funcionarios del gobierno. De nuevo, las semillas que la comunidad había plantado, incluida una que era parte de un ritual, fueron destrozadas. Después del incidente, se dieron cuenta de que ciertos individuos los seguían siempre que salían de sus comunidades. Como resultado de estas experiencias, fue fácil para ellos sospechar que las restricciones añadidas durante la pandemia estuvieran conectadas de alguna forma con sus luchas recientes por la tierra.

Pero lograron sortear su problema actual: los miembros de la comunidad lograron obtener sus pases de cuarentena. Establecieron un sistema en el que ciertos miembros de la comunidad irían en parejas o tríos a pescar y recolectar comida de los bosques que les quedan. En ocasiones, Datu Benjie me informaría acerca de qué comida lograban obtener, como los tubérculos que habían guardado de la cosecha anterior, miel silvestre y otras plantas que nunca había escuchado.

Para finales de abril, sin embargo, nuestros cortos intercambios se enfocaron en el clima. La comunidad todavía no podía cultivar porque las lluvias de mitad del verano que estaban esperando no habían llegado. Y eventualmente, él dijo que estaban cerca del punto de acabar con los recursos que tenían.

La resiliencia innata de los pueblos indígenas

Me tomó varias horas responder a ese último mensaje. El Instituto Samdhana había logrado organizar algunas rondas de distribución de auxilios en las comunidades dentro de nuestra ciudad. Pero la provincia de la comunidad Serukadang Menuvu, que está junto a la nuestra, tenía reglas de confinamiento muy estrictas: nadie de afuera podía entrar y los residentes que insistieran en dejar la provincia no podrían regresar.

¿Qué podríamos hacer? Por mucho, podíamos coordinar algo vía telefónica con sus oficinas locales del gobierno y asegurarnos que los miembros de la comunidad fueran incluidos en listas de beneficiarios. ¿Pero era eso sostenible para nuestras comunidades aliadas? Sabía que mi pregunta venía de mi

contexto: sentada en un computador y trabajando de forma confortable desde casa. ¿Cómo podía presumir que sabía qué era lo mejor para ellos?

Al final, lo único que le respondí a Datu Benjie fue “¿qué planean hacer?”. A lo que él respondió, “estamos pensando en eso”. Esta es probablemente la mejor respuesta que podía esperar.

La comunidad de Serukadang Menuvu se encuentra entre las comunidades aliadas más resilientes con las que trabajamos. Las generaciones más viejas de la comunidad florecieron a base de una economía de subsistencia. Pero dado que habían sido privados de su acceso a la mayoría de su territorio, tuvieron que recurrir a buscar salarios diarios. El área que pueden arar es tan limitada que sólo pueden seguir un patrón de cultivo y por tanto son más vulnerables a los cambios del clima.

En su mayoría, su subsistencia se ha vuelto dependiente de su ingreso como trabajadores agrícolas. Pero justo antes de que llegara la pandemia, las granjas cercanas se rehusaron a contratarlos, quizá por miedo a que fueran reclamadas como parte del territorio ancestral Serukadang Menuvu. Con el confinamiento, los miembros de la comunidad no podían ir más allá de sus vecinos inmediatos para buscar cualquier trabajo que los pudiera sostener mientras esperaban la próxima siembra.

Además, la comunidad lucha por el reconocimiento de su derecho a la representación, a través del representante de pueblos indígenas como lo obliga el Código de Gobierno Local, en las unidades locales de gobierno a nivel de la aldea. Así que cuando el gobierno municipal donó paquetes de comida durante el confinamiento, y dado que a la comunidad se le informó tarde, no todas las familias pudieron obtener los auxilios. Los líderes de la comunidad decidieron simplemente juntar los paquetes recibidos y dividirlos de forma equitativa entre todos los hogares. La unidad de gobierno local no ofreció ningún tipo de apoyo.

Estos asuntos resaltan los problemas compuestos a los que se enfrentan las comunidades indígenas en las Filipinas durante esta pandemia. Están siendo obligadas a depender en la economía de mercado dominante, sus territorios ancestrales ya no están bajo su control y esas tierras son apenas accesibles para ellas. Y aún así, en un momento de crisis, estas comunidades no son prioritarias para el apoyo.

Pero a lo largo de las décadas de tener que luchar por su mera existencia, las comunidades indígenas también han logrado construir resiliencia. Cuando las poblaciones urbanas de Filipinas recurrieron a las compras inducidas por el pánico al principio de la pandemia de la Covid-19, las comunidades indígenas ya se habían volcado a sus tradiciones de caza y recolecta. Ellas conocen su territorio, así como las plantas y animales a su alrededor. Por desgracia, en mi trabajo como coordinadora de un programa de financiaciones pequeñas, me he encontrado con comunidades que han estado tan expuestas a la ayuda externa que han olvidado sus propias capacidades.

Tan solo el febrero pasado estaba haciendo mis rondas de monitoreo y facilitando algunas evaluaciones de proyecto. Una comunidad indígena Tagbanwa del oeste de las Filipinas estaba tratando de obtener su certificado del título del territorio ancestral. Ellos expresaron sus dificultades aparentemente insuperables: sus gobiernos locales no los escuchaban, la agencia del gobierno establecida para apoyarlos no tenía ni el personal ni los fondos para hacerlo y no tenían abogados. Para ellos, fue una lucha contra todos los pronósticos. Me preguntaron a quién podían acudir. Y yo les dije la verdad: no había nadie.

Es decir, nadie más que ellos mismos. Como una “externa”, lo único que podía hacer para ellos era recordarles que necesitaban construir su fuerza y sus redes. Debían unirse con otras comunidades que enfrentaran problemas similares, para que pudieran fortalecerse. Los grupos de apoyo como el nuestro sólo podían llegar hasta un punto; nuestros fondos sólo pueden brindar un poco de apoyo en la movilidad y en adelantar algunas reuniones que de otro modo tomarían mucho tiempo en organizarse. Pero el trabajo debía ser de ellos.

Así que, en una pandemia como la que estamos viviendo ahora, ¿qué pueden hacer? Ellos son los únicos que pueden responder esta pregunta. Y sé que van a encontrar una solución. Siempre y cuando mantengan sus tradiciones y sus sistemas de conocimiento, van a sobrevivir, incluso más que nosotros en las áreas urbanas, que dependemos tanto de los mercados y estamos acostumbrados a consumir lo que no sabemos cómo producir.

La respuesta va más allá de la crisis de la Covid-19. Va más allá del problema de los confinamientos temporales. Está

enraizada en su tierra, en su lucha por reclamar y defender sus territorios.

Por ahora, las cuarentenas y confinamientos están comenzando a alivianar. Pronto va a llover y las comunidades van a poder cultivar.

CAPÍTULO 8
Covid Mahamaari:
Las experiencias de base
en Kerala, India

Neha Miriam Kurian
(India)

La pandemia de la Covid-19 se llama “Covid Mahamaari” en malayalam, el lenguaje nativo de Kerala, el estado más al sur de India y de donde provengo. La palabra Mahamaari se traduce no sólo como “pandemia” sino también como “gran tormenta”, como los monzones que Kerala experimenta usualmente, sólo que más grandes, más aterradores y más impredecibles. Y eso es exactamente lo que es la Covid-19 para Kerala, así como para muchas otras partes del mundo. Cada día la situación cambia y se aprenden y desaprenden nuevas lecciones.

Al principio de la pandemia, el estado de Kerala hizo todo lo posible para adelantarse a la pandemia (Kurian 2020). A principios de enero, cuando se estaban reportando casos en Wuhan, el Estado empezó a hacer pruebas en los aeropuertos. Y esto resultó ser útil, pues el primer caso que fue reportado en India, hacia finales de enero, fue de un estudiante de medicina que regresaba de Wuhan a Kerala. Gracias a las pruebas en los aeropuertos, el paciente fue identificado allí y enviado a un hospital de manera inmediata.

Incluso antes de que se impusiera el confinamiento a nivel nacional, el Departamento de Salud de Kerala lanzó una campaña estatal llamada “Romper la cadena” para generar consciencia acerca de la necesidad de lavarse las manos y mantener distancia social. Se instalaron unos kioscos para lavarse las manos y otros de desinfección en lugares públicos y frente a todas las oficinas del gobierno. El rastreo de contactos de cualquier persona que diera positivo durante este tiempo era hecho a través de una combinación de tecnología y unos trabajadores sanitarios comprometidos de nivel de base. Se emitieron protocolos estrictos y hubo un seguimiento regular de parte de funcionarios sanitarios para

asegurarse de que quienes estuvieran en cuarentena no la violaran. Los órganos del gobierno local organizaron infraestructura para la cuarentena institucional de quienes no tenían un espacio adecuado en sus hogares. Se abrieron comedores comunitarios para brindar comida gratuita o subsidiada a quienes la necesitaran en caso de confinamiento.

Todos estos pasos pueden atribuirse a varias características algo únicas en Kerala, particularmente el fuerte marco de gobernanza descentralizado del estado, una infraestructura de salud pública de base bien establecida, el espíritu de voluntarismo que ayudó a Kerala durante los recientes desastres y las lecciones aprendidas de esos desastres (un ciclón devastador en 2017, inundaciones en 2018 y 2019 y un brote del virus Nipah en 2018). En diciembre de 2019, en un esfuerzo por capitalizar estas mismas características, Kerala también inició un experimento social único: un proceso de planificación de manejo de desastres desde abajo a través de los 1034 órganos locales de autogobierno del estado (Heller 2020).

Por tanto, a principios de abril de 2020, justo una semana después de que India impusiera un confinamiento a nivel nacional, Kerala se regocijaba de tener la delantera ante el virus.

Sin embargo, seis meses después, la euforia inicial se ha desvanecido. La Covid-19 está resultando ser una batalla larga y agotadora sin una clara meta a la vista. Y aunque los residentes se han aclimatado a los peligros del virus y las restricciones en y en torno a sus vidas, el miedo ante la Covid-19 y las repercusiones sociales y económicas del confinamiento todavía presentan una amenaza grande, pues Kerala ha visto una segunda ola de casos. Y ahora, en la segunda fase del confinamiento, que fue impuesta como resultado de un resurgimiento de casos, están juntándose otros problemas que van a poner a prueba la resiliencia de Kerala a largo plazo en un mundo poscovid.

Una maratón, no una carrera

A principios de la pandemia, Kerala reconoció la importancia de asegurar el tránsito libre de información. Desde las campañas a nivel estatal a través de las redes de trabajadores sanitarios de base y los autogobiernos locales, hasta las ruedas de prensa diarias hechas por el ministro en jefe el gobierno del estado intentó

asegurar la diseminación de información precisa acerca de la enfermedad y de los protocolos del gobierno en todos los rincones del estado. Al ser un estado con una alta alfabetización digital, el gobierno también utilizó redes sociales, como Facebook y WhatsApp, para asegurar una mejor transmisión. Se prestó una atención especial para garantizar que los grupos marginalizados, como los trabajadores migrantes de otros estados y personas en secciones económicamente desventajadas, también recibieran la atención requerida.

Sin embargo, en marzo, hubo un incidente de agitación entre un grupo de obreros migrantes de los estados del norte, que protestaron y demandaron que se les permitiera cruzar las fronteras estatales para regresar a sus hogares. Al quedarse sin trabajo y sin dinero en medio del confinamiento, se juntaron en las calles sin importar el distanciamiento físico y otros protocolos contra la Covid-19. Se descubrió después que lo que desencadenó la protesta fue una serie de mensajes falsos en WhatsApp. El gobierno lidió con esto de forma inmediata al ubicar a personas que hablaran el idioma de los trabajadores para comunicarse con ellos; al mismo tiempo, sin embargo, esto expuso las fallas en un sistema que está basado en gran medida por las demandas de la sociedad general y no de los casos atípicos.

En julio surgió otra situación en la que, después de un contagio grupal en una aldea costera al sur de Kerala, el gobierno impuso un confinamiento completo en la aldea, hasta el punto de desplegar comandos policiales para asegurar que las personas no salieran de sus casas. Pero lo que esto significó fue que los pescadores, que dependían de salarios diarios para subsistir, fueron obligados a estar dentro de sus pequeñas casas sin ninguna forma de ganar dinero. Ellos, también, se juntaron en las calles para protestar, contra los protocolos de la Covid-19. Este evento luego estalló en redes sociales por la sociedad general y su falta de comprensión de las realidades de las comunidades marginalizadas. Aquí también, aunque el gobierno tomó los pasos inmediatos para trabajar con los pescadores para resolver la situación, esta mostró cómo los grupos vulnerables se hacían más vulnerables de cara a una pandemia.

Los problemas en torno a la brecha digital también mostraron su cara durante la pandemia. Por ejemplo, cuando las clases se

volvieron virtuales después de no tener escuelas durante meses, fue evidente que muchos estudiantes de sectores marginalizados no tenían acceso al mismo tipo de tecnología que el resto de la sociedad. Aunque el gobierno ha tomado pasos para apoyar a los estudiantes en esas condiciones al brindarles acceso a la tecnología requerida, esto ha presentado bajas. Al menos tres estudiantes se suicidaron como resultado de la angustia por no poder acceder a sus clases virtuales.

Lo mismo ocurre con los trabajos. Aunque muchos de las personas con trabajos de cuello blanco y en el sector de tecnologías de la información de Kerala han podido trabajar desde casa y siguen ganando un salario similar al que ganaban antes, esto no ha sido el caso para las personas que trabajan en el sector informal. Con la reducción de la demanda y la interrupción de las cadenas de abastecimiento, estos trabajadores han estado enfrentando una vulnerabilidad económica como nunca antes. Aquí, de nuevo, aunque el gobierno ha tomado múltiples pasos para abordar la situación, como la emisión de moratorias a los pagos de préstamos y otros tipos de transferencias monetarias directas, al final puede que se requiera mucho más para asegurar que el impacto de esos desastres no golpee a sectores de la sociedad que ya estaban luchando en las realidades duras e implacables del mundo neoliberal.

El camino por delante

El camino por delante de la Covid-19 no va a ser fácil para ninguna parte del mundo, y mucho menos para los países en vías de desarrollo y sus poblaciones marginalizadas. Con respecto a Kerala, un estado predispuesto a los riesgos que van a aumentar por el cambio climático, los múltiples desastres en años recientes han hecho a la población cada vez más vulnerable. A diferencia de antes, la lluvia durante la temporada de monzones se ha vuelto más impredecible e intensa. E incluso en medio de la pandemia, Kerala se enfrentó a múltiples tragedias el mismo día, cuando un gran derrumbe mató a setenta trabajadores agrícolas pobres y un accidente aéreo por mal tiempo mató a casi veinte pasajeros.

El modelo de desarrollo descentralizado que Kerala ha instaurado durante las últimas dos décadas y media brinda algo de esperanza para la resiliencia comunitaria de largo plazo. Hasta ahora, esto ha sido lo que ha ayudado a Kerala a seguir adelante

en estos tiempos. Y puede brindar lecciones para otras partes del mundo. Desde los grupos locales de barrios que ofrecen créditos, hasta trabajadores sanitarios locales que conocen cada rincón de sus áreas, Kerala tiene las herramientas necesarias para construir una autoresiliencia entre las comunidades. Pero dicho eso, incluso Kerala debe construir sobre sus fortalezas existentes, aprender de la crisis actual y permanecer vigilante para asegurar que sus políticas poscovid-19 sigan siendo basadas en las personas.

Esto importa porque el mundo poscovid-19 definitivamente no va a ser el mismo. Va a requerir de muchos niveles de reinención y reorientación, quizá sin ningún tiempo para planear o preparar. También puede significar que podemos caer presas de las soluciones tecnocráticas de corto plazo que ponen la experiencia vivida y el conocimiento comunitario en las márgenes. Ese escenario debe evitarse a toda costa. Y por esa misma razón, este es un momento para que Kerala fortalezca su modelo descentralizado aún más para asegurar que sostiene las manos de quienes sufren en medio de estas tragedias y que trabaje hacia una sociedad aún más igualitaria.

Quizá un ejemplo de una aldea en Kerala puede enseñarnos algo: un líder del autogobierno local, al enterarse de que alguien de su área estaba siendo estigmatizado por sus vecinos como resultado de un mensaje falso de WhatsApp que decía que él era un paciente con Covid-19, decidió hacer algo peculiar. Incluso entre los requisitos de confinamiento y distanciamiento social, el líder decidió tomar la mano de este hombre y caminar públicamente a través de las calles principales de la aldea. A través de sus acciones, él demostró que en los momentos de crisis, sólo la confianza mutua nos puede ayudar a seguir adelante.

Referencias

Kurian, O. C. (2020). "How the Indian State of Kerala Flattened the Coronavirus Curve". *Guardian*, 21 de abril. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/21/kerala-indian-state-flattened-coronavirus-curve>.

Heller, P. (2020). "A Virus, Social Democracy, and Dividends for Kerala". *Hindu*, 21 de abril. <https://www.thehindu.com/opinion/lead/a-virus-social-democracy-and-dividends-for-kerala/article31370554.ece>.

CAPÍTULO 9

La desigual pandemia

Cristián Sanhueza Cubillos
(Chile)

Aquí todo comenzó la segunda semana de marzo. Estaba en Santiago, Chile, pronto a viajar a Isla Pascua. Asistiría a una actividad con la comunidad indígena más grande del pueblo Rapa Nui y del país, Ma'u Henua, quienes se reunirían a reflexionar de cara al plebiscito constituyente previsto para abril de 2020. Por primera vez en la historia del país, las personas decidirían redactar o no una nueva Constitución, luego de que el Congreso aprobara una reforma constitucional a finales de 2019 para realizar un plebiscito constituyente. Esto, inédito en la historia constitucional en Chile, es producto de las grandes movilizaciones sociales de octubre.

Sin embargo, ni el viaje ni el plebiscito se pudieron realizar según lo planificado. El arribo de la pandemia obligó a retrasar la democracia y, con ello, también las expectativas del mañana. Me encontraba dispuesto para un viaje al ombligo del mundo, pero terminé mirando el mío.

De todos modos, el virus llegó a la isla. Una rápida coordinación inicial entre las familias del pueblo instó a las autoridades locales a adoptar las medidas correspondientes y evitar un contagio masivo. Así, desde marzo de 2020, la isla mundialmente conocida por los *moais* se encuentra confinada, sin aviones de pasajeros hacia ni desde el continente. Y aunque a la fecha de edición de este ensayo los contagios en la isla han aumentado excepcionalmente, el turismo ha cesado. De las 130 000 visitas aproximadas que recibía cada año Rapa Nui, hoy sólo hay viajes de abastecimiento y de urgencias. La principal fuente de economía local, el turismo, fue ahogada por los efectos de la pandemia.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2020), si los gobiernos

no toman cartas en el asunto, esta crisis sanitaria podría convertirse en una crisis alimentaria que, en el caso chileno, afectaría a un millón de personas, es decir, casi de un 5% de la población del país. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2020) pronosticó que cerca de un millón de personas está en riesgo de caer en la pobreza, lo que aumentaría la tasa de la población viviendo bajo la línea de pobreza a 13,7% —un incremento que no ocurría desde el retorno a la democracia en 1990. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2020) publicó en julio de 2020 una cifra similar de 12,2% de desempleo en el país, la más alta registrada en los últimos diez años. Así las cosas, al parecer, la “nueva normalidad” navega por aguas familiares pero más profundas: entre el hambre, el desempleo y la precariedad.

Diversos Estados, apoyados por los medios de comunicación, popularizaron un discurso de “nueva normalidad” que, en tanto tal, tiene poco de original. Ni la presencia de un virus de gran escala ni cómo afecta a la población más desventajada es un relato que debiese sorprender. En 1939, el escritor chileno Nicomedes Guzmán publicó su libro *Los hombres oscuros*, una pequeña novela que retrata la vida proletaria de un conventillo santiaguino en tiempos de plena cuestión social. Coincidentemente, la historia es relatada por “Pablo Acevedo”, un lustrabotas cuyo amor se ve frustrado a manos de la pandemia, que en esos tiempos era el tifus. Quizás mi pesimismo insistiría que, entonces, no hay nada nuevo bajo el sol: el relato del hacinamiento, el pan que se comparte, en fin, una pandemia desigual que se normaliza.

Aún así, llama la atención la acelerada producción normativa para ajustar dicha “nueva normalidad” a la vida de las personas, aunque estas no participan en ello. Como si no quedaran alternativas, el estado de excepción constitucional por catástrofe en el país ha configurado el soporte jurídico para acoplar las demandas de estos tiempos. En cierto modo, el derecho apresura la normalización al desvanecer lo nuevo a través de una regla que impera día a día. En este sentido, en Chile el derecho se ha utilizado para estacionar nuevas prácticas que operan como facilitadores del beneficio de pocos sobre muchos. La instalación de leyes laborales durante la excepción permitió que grandes conglomerados económicos se acogieran al beneficio de “suspender” las relaciones que tuvieran con sus trabajadores, quienes debieron echar mano a su

propio seguro de cesantía para sostener un ingreso mensual durante la pandemia. Sin embargo, las mismas compañías repartían utilidades entre sus socios en montos que superaron, incluso, el máximo legal. Tal como advirtió Walter Benjamin (2010), la tradición de los oprimidos da cuenta que el “estado de emergencia en que vivimos es la regla”, y Chile ofrece un ejemplo de aquello.

De forma paralela, en esa supuesta “nueva normalidad”, la ciudad de Santiago, y en particular la comuna del mismo nombre, radicó el lugar con los confinamientos más extensos de la región, si no del planeta. Ya van más de 9 meses confinados entre controles policiales, militares en las calles, toque de queda nocturnos, restaurantes cerrados, locales en arriendo, departamentos vacíos y el incesante “quédate en casa”. Y allí, en la hogarización de la vida, el mundo que cabe entre cuatro paredes reproduce las desigualdades de afuera. La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzille Miambo-Ngcuka (2020) advirtió el aumento de la violencia contra las mujeres durante la pandemia, la “otra pandemia en la sombra”. El efecto silencioso, sin embargo, ha seguido la corriente. Según el reciente estudio del Termómetro Social, elaborado por el Núcleo Milenio en Desarrollo-Social de la Universidad de Chile (2020), el impacto de la pandemia ha generado un deterioro en la salud mental que ha afectado mayoritariamente a las mujeres (un 55,6% de las mujeres encuestadas señaló estar mucho peor o peor que antes, comparado con un 42,8% de los hombres consultados). De hecho, un estudio del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales (La Tercera 2020) abordó el trabajo doméstico y su distribución por género, en el que se encontró que el 34% de los hombres destinó *ceros* horas a la semana a estos trabajos, comparados con sólo el 14% de las mujeres que hizo lo mismo.

La pandemia no llega a fundar una nueva normalidad, sino a acrecentar las diferencias en las cuales ya se sostiene una “normalidad” aparente. En parte, lo novedoso es la utilización de la excepción para fundar una normalidad. O sea, utilizar la pandemia para extremar medidas que, de otro modo, no se hubiesen realizado, tales como el imperio del teletrabajo, la extensión de la cibervigilancia o la amplificación de lo privado sobre lo público. Incluso en Chile, ante la ausencia de medidas que beneficiaran la economía familiar, se optó por autorizar el retiro de un 10% de los fondos de pensiones que, por años, los trabajadores han

ahorrado. Esta es una situación inédita para el sistema de pensiones del país, el cual durante años tuvo defensores que habían impedido su modificación y postulaban mantener la administración privada de los fondos. Sin duda el coronavirus ha puesto a flote otras desigualdades en cómo enfrentamos el riesgo a la muerte, o, dicho de otro modo, cómo sobrevivimos.

Las capacidades con las que hemos respondido a esta pandemia distan del lugar que ocupamos en la sociedad. Mientras algunos evaden las grandes ciudades en sus segundas viviendas en la playa, otros, en cambio, yacen doblemente confinados, tanto por el virus como por las desigualdades de la normalidad que han vivido desde antes: el hacinamiento, el miedo a la violencia —incluso de los más cercanos—, el salir temprano de casa y volver agotado de noche, en fin, el hambre cotidiana que se come las esperanzas de un mejor vivir. Allí donde vivir es una excepción.

Aquello parece una paradoja a estas alturas de la civilización. En pleno siglo XXI, persisten las injusticias. De todos modos, tal como sostiene Kathryn Sikkink (2018), hay *razones para la esperanza*. En el libro de igual título, la autora ofrece un estudio empírico de cómo los derechos humanos han mantenido una eficacia progresiva durante las últimas décadas, al disminuir los focos de amenaza (como la violencia) o fomentar el incremento del acceso a la salud o la educación. Aunque no se trata de una tarea hecha, Sikkink sostiene que el progreso de estos derechos es siempre un proceso más que un punto de llegada. No es una tarea finita, sino una que requiere de constante esfuerzos que van ensanchando la historia de la esperanza.

Por ello, en tiempos en los que se presenta la desesperanza, hay que recuperar el derecho como vía de transformación y ser fiel al acontecer de aquellos que desde la excepción exigen a gritos una vida que vivir o rescatar las condiciones para que el futuro siga abierto. Allí, los derechos humanos ya no podrán actuar de manera pasiva sólo para recordar la dignidad que nos merecemos y que se escapa ante las violaciones, sino más bien deben operar como catapulta hacia la condición infinita de todo sujeto: esa que se identifica con la posibilidad de formar parte de las verdades que habitan en un mundo. Se trata, como diría Alain Badiou (2000), de “fabricar igualdad”.

En ese sentido, los derechos humanos comparten esa condición singular de la excepción: muchas veces se está del otro lado del orden, de lo normal. Dicho de otro modo, el reverso del derecho contiene componentes de justicia que también vale explorar. Y es que tal como lo concibe Manuel Atienza (2017), el derecho no es una realidad dada sino más bien un acontecer en que la añeja distinción entre derecho y moral está superada por una *práctica jurídica* que no separa objetivos de valores asociados en la norma. En una situación pandémica en la que el orden se vio alterado contra la inercia del ritmo acelerado de vida, sin detenerse, la pregunta es hacia qué sociedad aspiramos avanzar y, con ello, cuáles serán los sellos que le imprimiremos a la formación de nuevas sentidos que emergen a contrapelo.

A juicio de Nick Srnicek y Alex Williams (2018), en escenarios como estos en los que va cayendo el mundo (totalitarismo, control tecnológico, violencia), el desafío es articular las diferencias en un proyecto común. Se trata de pensar nuevamente en utopías que brinden un objetivo más allá de la obsoleta repetición de lo mismo que ofrece el capitalismo. Aquella normalidad agobiante que asfixia las ventanas de los mundos posibles es insostenible. Y es que el futuro está abierto como para cerrarlo a normalidades que excluyen las excepciones que exceden lo común, lo esperado, lo normal. Esto parece fundamental en un escenario político constituyente, cuyo desafío es forjar un pacto social que sea capaz de albergar las posibilidades del mañana y no restringirlas a una repetición incansable.

Al cierre de esta edición, ya es octubre de 2020 y está por cumplirse un año del “estallido social” que dio origen al proceso constituyente. Han sido 365 días en que el estado de excepción ha acompañado los sueños de muchas personas por un Chile distinto. Luego de meses de confinamiento, las calles se han vuelto a poblar de personas que exigen igualdad. La Plaza Baquedano, en honor a un general de siglo XIX, es resignificada por la Plaza Dignidad: aquella necesaria para garantizar que seamos algo más que sólo animales que no se dejan morir sobre la faz de la tierra. Más bien para que seamos, en conjunto, la infinita humanidad.

Referencias

- Atienza, M. (2017). *Filosofía del Derecho y transformación social*. Madrid: Editorial Trotta.
- Badiou, A. (2000). "La Ética y la cuestión de los derechos humanos". *Acontecimiento* 19–20: 61–74.
- Benjamin, W. (2010). "Tesis de filosofía de la historia", en *Ensayos escogidos*. Buenos Aires: El cuenco de Plata.
- CEPAL. (2020). "El desafío social en tiempos del COVID-19, Informe Especial N° 3". 12 de mayo. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf
- FAO. (2020). "Intervención de Julio Berdegué en MINAGRI, Chile". Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=HAD99S11nbE&feature=emb_title.
- Instituto Nacional de Estadísticas (2020). "INE publica resultados de la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre abril-junio de 2020". Disponible en <https://www.ine.cl/prensa/2020/07/31/ine-publica-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-empleo-del-trimestre-abril-junio-de-2020>
- Núcleo Milenio en Desarrollo Social (DESOC), Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) (2020). "Termómetro Social, N° 3-2020". Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1DaULMpYdBMXLHre_9xauOujEbYC-tYBF/view
- La Tercera. (2020). "Más carga para la mujer: estudio reveló que casi el 40% de los hombres destinó 0 horas a la semana en actividades como cocinar, limpiar o lavar ropa", 13 de agosto. Disponible en: <https://www.latercera.com/pulso/noticia/nada-ha-cambiado-en-cuarentena-los-hombres-aportan-muy-poco-tiempo-a-labores-del-hogar-el-cuidado-de-los-hijos-y-su-educacion/73MAHJEYE5AVXOVTQNJNUOAZSA/>
- Sikkink, K. (2020). *Razones para la esperanza. La legitimidad y efectividad de los derechos humanos de cara al futuro*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Srnicek, N. y Williams, A. (2018). *Inventar el futuro. Poscapitalismo y un mundo sin trabajo*. México: Malpas Ediciones.

Autores

Ana Belique

Socióloga, activista, defensora de los derechos humanos. Miembro fundadora y líder del Movimiento RECONOCIDO y fundadora de la iniciativa Muñecas Negras RD.

Mary Louise Dumas

Investigadora y defensora de los derechos humanos. Trabaja en el Instituto Samdhana en la facilitación de financiación para pueblos indígenas y comunidades locales. Ha estado trabajando en los derechos al territorio y los derechos de los pueblos indígenas desde que estudiaba en la universidad.

Precious Eriamiatoe

Abogada con experiencia en derechos humanos, derecho internacional humanitario y derechos del niño. Tiene una maestría en derecho internacional de los derechos humanos (con distinción) de la Universidad de Oxford. Ha trabajado en derechos humanos y asuntos humanitarios en Uganda, Nigeria y Sudán del Sur. Actualmente trabaja en Irak.

Sana Farrukh

Abogada con un especial interés en la reforma a la justicia penal, el derecho ambiental y los derechos digitales. Actualmente lidera el equipo de litigio en el Justice Project Pakistan, una ONG que defiende a los prisioneros más vulnerables con las sentencias más duras.

Neha Kurian

Abogada, investigadora y defensora de comunidades vulnerables en asuntos de justicia ambiental. Tiene una maestría en Derecho Internacional del Cambio Climático del Instituto de Posgrados para los Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra.

Natalia Mendoza Servín

Abogada y maestra en transparencia y protección de datos personales. Coordinadora de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara.

Adebayo Okeowo

Abogado y Program Manager para África de WITNESS, una organización internacional que apoya a activistas y comunidades para utilizar videos y tecnologías para la defensa de los derechos humanos. Tiene un LLM de la Universidad de Pretoria y es experto en derecho penal internacional, derecho internacional de los derechos humanos y derechos socioeconómicos.

Jennifer Peralta

Periodista de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente vive en Chile y trabaja en diferentes áreas de la sociedad civil y gobierno, desde una perspectiva de derechos humanos y diálogo.

Cristián Sanhueza Cubillos

Abogado con experticia en derecho público, derechos humanos y pueblos indígenas. Consultor para organizaciones indígenas y de gobierno en Chile. Actualmente ejerce como profesor ayudante en la Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

La desigualdad pandémica

Relatos de la sociedad
civil del Sur Global

Este libro es el resultado de un esfuerzo colectivo por parte de los ex alumnos del Taller Global para Jóvenes Defensores de Derechos Humanos, organizado cada año por Dejusticia. Los talentosos autores de este libro, que son activistas e investigadores del sur global, encarnan una nueva manera de relatar los derechos humanos y las reivindicaciones de justicia social. Debido a la pandemia de la Covid-19, el Taller Global de 2020 tuvo que ser aplazado, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de relatar la pandemia a través de sus voces, diversas y comprometidas desde Chile hasta Pakistán, pasando por República Dominicana y Nigeria.

En este volumen, los y las autoras exploran los efectos de la pandemia con un denominador común: la desigualdad. Aquella desigualdad estructural que la pandemia ha revelado o agudizado, pero que al mismo tiempo ha contribuido a la organización social colectiva y a cuestionar a los gobiernos desde sus fundamentos.

La desigualdad pandémica también reflexiona sobre el rol de la sociedad civil en estos tiempos de coronavirus. ¿Cuáles son los nuevos papeles que implican estos cambios para la sociedad civil, para las formas como nos organizamos y como hacemos incidencia? Los colaboradores de este libro, desde distintas perspectivas, nos invitan a considerar lo que estamos aprendiendo de la pandemia acerca del papel de la movilización colectiva y la sociedad civil en tiempos de crisis, lo cual puede contribuir a reorientar nuestro trabajo hacia el futuro.

Gracias a su estilo de narrativa, al enfoque y al esfuerzo por narrar la pandemia desde la intersección entre el mundo de la investigación y el del activismo, este libro está destinado a una audiencia internacional amplia que va desde académicos y activistas, hasta periodistas y personas que están interesados no sólo en las historias, sino en la manera de narrarlas.

9 789585 597519



Dejusticia